

SITUACIÓN DE LA LEGISLACION **COOPERATIVA URUGUAYA**

I) ORIGENES Y EVOLUCION

Como ha ocurrido en la generalidad de los países, el fenómeno cooperativo en Uruguay precedió a la legislación, datando de principios del siglo XX.

Se pueden mencionar algunas leyes precursoras de la regulación del cooperativismo, creadoras de figuras jurídicas regidas por principios de mutualidad e inspiradas en fines de promoción del desarrollo solidario, como las leyes 3.948 y 3.949 del 19 de enero de 1912, por las que nacieron las “Cajas de Crédito Rural”, y la ley 6.192 del 16 de julio de 1918 de “Sociedades de Fomento Rural”, figura jurídica que pervive, integrada gremialmente al movimiento cooperativista a través de la entidad que las agrupa, la Comisión Nacional de Fomento Rural.

La primera norma que reconoce y regula una modalidad cooperativa como forma asociativa típica, fue la ley 10.008 del 5 de abril de 1941 relativa a las cooperativas agropecuarias, actualmente derogada. Es una norma definidamente comercialista, lo cual resulta comprensible para su época; con ella se inaugura un proceso legislativo pautado por características marcadas: fragmentación de la regulación por modalidades, incoherencias, contradicciones y vacíos propios de un cuerpo normativo no sistematizado, e indefinición en temáticas comunes a todo el cooperativismo.

La siguiente norma relevante que se aprobó fue la ley 10.761 del 15 de agosto de 1946, que luego de casi 60 años continúa rigiendo a la mayoría de las modalidades, con su decreto reglamentario de 1948. Implícitamente regula a las cooperativas como sociedades de naturaleza comercial, clasificándolas en cooperativas de producción y de consumo, atendiendo al exclusivo -y defectuoso- criterio de dividir las según la forma de distribución de los excedentes. De este mismo hecho deriva una discusión clásica entre los estudiosos del tema: si se trata de una ley de alcance general, reguladora de las distintas modalidades de cooperativas de usuarios y de trabajadores, o si solamente refiere a las cooperativas de producción (trabajo asociado) y consumo, sin perjuicio de las remisiones expresas que hace a ella la legislación específica de cada modalidad cooperativa. Se trata de una ley de 18 artículos, complementada por un decreto reglamentario de 25 artículos, todos ellos extremadamente simples, dejando sin regular áreas temáticas fundamentales.

A partir de la década de 1960, comienzan a aparecer leyes particulares para cada una de las (denominadas) modalidades cooperativas, algunas de las cuales preexistían y funcionaban al amparo de la figura de “cooperativa de consumo”, como ocurrió con las de vivienda y las de ahorro y crédito. Tengamos presente que los tipos sociales cooperativos, en el derecho uruguayo, son de objeto cerrado. No pueden existir, por ejemplo, cooperativas mixtas de usuarios y trabajadores, ni cooperativas de objeto social múltiple, ni figuras no previstas especialmente.

Para la modalidad producción (trabajo asociado), se sancionó la ley 13.481 del 23 de junio de 1966, que las exoneró del pago de impuestos nacionales y del aporte

jubilatorio patronal, siempre que reunieran los requisitos de su artículo 1º. Algunos de estos requisitos corresponden a una visión superada de la modalidad, representando un serio perjuicio para la existencia de cooperativas, especialmente en el campo de los servicios. Este régimen de tributación fue extendido por la ley 14.019 del 7 de setiembre de 1971, a las cooperativas de consumo.

El 17 de diciembre de 1968 se sancionó la ley 13.728, conocida como la Ley Nacional de Viviendas, cuyo Capítulo X refiere a las cooperativas de vivienda, previendo distintos tipos, así como la existencia de personas jurídicas de carácter auxiliar (Institutos de Asistencia Técnica), destinadas a garantizar o facilitar el logro de su objeto social. Esta ley significó un adelanto en varios sentidos.

Desde el punto de vista jurídico, se trata de una ley que diferencia a la cooperativa de vivienda de las sociedades comerciales y reconoce expresamente -por primera vez- que se rigen por los principios del cooperativismo. Delinea los principios generales sobre cuya base deben organizarse y regula con precisión el derecho de uso y goce para el caso de las cooperativas de usuarios.

Desde el punto de vista político, es un ejemplo muy atendible. Pretende tratar de forma integral la promoción de la construcción de viviendas, dentro de la cual inscribe el capítulo referido a las cooperativas. El tratamiento promocional de éstas se vio reflejado en la política gubernamental hasta la caída del régimen democrático de gobierno y obtuvo un contundente impacto, que demuestra que cuando se le conceden las herramientas adecuadas, el cooperativismo da respuestas positivas.

La ley 13.988 del 19 de junio de 1971, reconoció la existencia de las cooperativas de ahorro y crédito. Esta ley fue casi totalmente derogada por el decreto-ley 15.322 del 17 de setiembre de 1982 denominado de Intermediación Financiera, uno de cuyos capítulos refirió específicamente a las cooperativas, clasificándolas en dos tipos: las que realizan intermediación financiera o “abiertas”, y las de capitalización o “cerradas” (en cuanto no reciben depósitos ni de sus socios ni de terceros, artículo 29, decreto-ley citado). Las primeras cumplen operatoria plena, estando sometidas al contralor y a la normativa bancocentralista.

Las cooperativas de profesionales de asistencia médica, un tipo especial dentro de la modalidad de cooperativas de trabajadores, fueron reconocidas por el decreto-ley 15.181, del 18 de julio de 1981. Esta norma es la que regula, con carácter general, la asistencia médica y prevé que cuando ésta sea colectiva y privada, podrá adoptarse -entre otras- la figura cooperativa.

Las cooperativas agroindustriales fueron objeto del decreto-ley 14.827 del 12 de setiembre de 1978 y su decreto reglamentario de 1981.

El decreto-ley 15.645 del 9 de octubre de 1984, actualizó la normativa referente a las cooperativas agrarias. Responde a una concepción más moderna que toda la restante legislación. Reconoce la especificidad del fenómeno cooperativo y la existencia del acto cooperativo. Ofrece una regulación más completa y soluciones más acordes con la evolución del derecho comparado.

El avance más significativo, en materia de legislación general de las cooperativas, se alcanzó gracias a una propuesta del movimiento cooperativista. Se trata de la ley 16.156 del 29 de octubre de 1990, que en sus cuatro artículos refiere a la personalidad jurídica de las cooperativas. Determina la inscripción de todas ellas en un único Registro, el cual las califica mediante un exclusivo control de legalidad. De esa manera, quedaron sin efecto todos los trámites burocráticos que en los hechos desalentaban la constitución de nuevas cooperativas, facilitándose asimismo las modificaciones estatutarias.

Al año siguiente, por decreto 128/991, se creó, en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, la Comisión Honoraria del Cooperativismo, en un primer intento de relación institucionalizada entre el gobierno nacional y el movimiento cooperativo en su conjunto, representado por CUDECOOP.

En contraposición con este panorama caótico en materia de legislación cooperativa, la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989, de sociedades comerciales, es un prolijo y detallado cuerpo normativo, sustitutivo de centenarias previsiones del Código de Comercio. Su artículo 515 hace aplicable sus previsiones a las cooperativas, en forma subsidiaria a la legislación específica “y en cuanto sea compatible”, reconociéndose así legalmente la diferenciación sustancial entre ambas clases de personas jurídicas.

Pero como un corolario más de los vaivenes reseñados, apareció el decreto 223/98 del 17 de agosto de 1998, relativo al contralor de las cooperativas por la Auditoria Interna de la Nación, que adoptó el criterio de asimilar las exigencias y modalidades de control de éstas con las referentes a las sociedades anónimas abiertas. Así fue que se limitaron los controles a las “sociedades” cuyos activos, capitales o ingresos operativos superaran las 60.000 Unidades Reajustables. Desde entonces, hay modalidades de cooperativas sometidas a controles duplicados (intermediación financiera, seguros) y un sinnúmero de entidades incontroladas, dando pie al surgimiento de falsas cooperativas.

Cabe mencionar que, ya desde el Poder Ejecutivo, ya desde el movimiento cooperativo, se han realizado intentos por adecuar la legislación de cooperativas, y así, se conoce la existencia de anteproyectos en los años 1974, 1985 y 1992, que no prosperaron.

II) CARACTERIZACION. PROBLEMÁTICA.

A) Inexistencia de una ley general.

Ya anotamos que la oscuridad del texto legal conduce a la doctrina a discutir sobre el alcance de la ley 10.761: si puede considerarse de aplicación a la generalidad de las modalidades, con excepción de las agrarias o si abarca solamente a las cooperativas de producción y consumo y a aquéllas cuyas leyes especiales se remiten especialmente a la Ley 10.761.

Pero, trascendiendo ese análisis técnico jurídico, lo que caracteriza a ese cúmulo de normas reguladoras del cooperativismo es su desconexión, la carencia de una unidad conceptual, la insuficiencia, los vacíos y las incoherencias.

B) Limitación de los tipos de cooperativas

Como consecuencia de la técnica legislativa adoptada y de los textos de las normas especiales, solamente pueden constituirse cooperativas enmarcadas en las modalidades expresamente previstas: producción (trabajo asociado), consumo, agrarias, agroindustriales, vivienda y ahorro y crédito. No es posible conformar cooperativas que comprendan más de un objeto social ni de composición mixta de usuarios y trabajadores. En ramas anteriormente desconocidas, como la de seguros o garantías recíprocas, se constituyen como cooperativas de consumo.

Tampoco se acepta la posibilidad de crear cooperativas en la totalidad de las áreas de la actividad económica lícita. Por ejemplo, se reservan a las sociedades anónimas abiertas los seguros (el decreto reglamentario de la ley de desmonopolización reconoce, por excepción, a la Cooperativa Surco, por preexistir a su vigencia) y la administración de fondos previsionales.

C) Calificación jurídica de las cooperativas

Esa legislación fragmentaria, desarrollada a lo largo de un extenso período, está inspirada por concepciones diferentes y hasta opuestas. En algunos casos, se asimila a las cooperativas con las sociedades mercantiles, en tanto que en otros se las distingue claramente, reconociéndose la especificidad del acto cooperativo y la especialidad (si bien no la autonomía) del “derecho de las cooperativas”. Como vimos, el art. 515 de la ley de sociedades comerciales, de alcance general, significó un avance en la materia.

De todas maneras, no existe un tratamiento igualitario y claro en materia de interpretación e integración del derecho (¿cooperativo?) ni un reconocimiento general de los principios cooperativos.

En estos últimos años, se está incorporando a las distintas legislaciones nacionales la definición que la Alianza Cooperativa Internacional ha establecido, conjuntamente con la nueva formulación de los principios cooperativos, dada en Manchester en 1995. Esa revisión de los principios obedece a necesidades muy concretas de actualización de la figura cooperativa para su participación en la economía y sociedad actuales.

D) Ineficiente y atomizado sistema de contralor estatal.

Distintos Ministerios, según la rama de actividad, son competentes en el contralor de las diferentes clases de cooperativas. En términos generales, todas ellas estaban sometidas a la Inspección General de Hacienda, que se caracterizó por un intervencionismo excesivo y burocrático. Sustituida por la Auditoría Interna de la Nación, se recortaron tanto sus competencias de contralor que un vastísimo sector quedó totalmente marginado del contralor, permitiendo la proliferación de pseudo cooperativas.

E) Deficiente regulación de temas básicos: gestión, aspectos económico-financieros, educación, integración cooperativa.

Todos estos puntos son los clásicos capítulos de una ley general; su ausencia distorsiona el marco normativo, haciendo inaplicables las soluciones legales de una modalidad a otra. Esto se agrava en cuestiones de máxima vigencia en la actualidad comparada, como en lo referente a los sistemas de capitalización, que -naturalmente- son ignorados por las viejas normas.

F) Inexistencia de un sistema legal de promoción del desarrollo del cooperativismo.

Las únicas herramientas legalmente previstas para favorecer al cooperativismo son las exoneraciones tributarias y los sistemas de retención salarial. Nada está previsto sobre la difusión del cooperativismo, educación, información, datos estadísticos, asistencia técnica, financiamiento, apoyo a programas de modernización y reconversión.

G) Inexistencia de un órgano estatal con competencia general en la materia.

Este punto está estrechamente ligado al anterior, retroalimentándose recíprocamente. La relación de las cooperativas con el Estado es desordenada y dispersa, tendiendo a ser ineficaz. Ello dificulta la concepción de una política general única de promoción del cooperativismo, haciéndose imprescindible la creación de un ente u órgano jerarquizado que articule, ordene y planifique las acciones, proponga normas y dialogue con los actores involucrados: cooperativistas y jefes de la administración vinculados. Es así que la relación del cooperativismo con el Estado depende de la orientación y voluntad del jefe de turno de cada oficina. Se señalará más adelante la importancia que organismos internacionales asignan a este punto.

H) Perspectiva regional.

Luego de exponer una legislación cincuentenaria, aludir a este punto puede resultar risueño, pero es nuestro deber anticiparnos a la problemática. Uruguay mantiene crecientes lazos con la región, siendo un miembro activo del MERCOSUR. Es imprescindible analizar comparativamente la legislación cooperativa de la región, facilitando la actividad de las cooperativas en el marco regional, la asociación entre las mismas y con terceros y aún la formación de cooperativas de primer grado que incluyan asociados de diversos orígenes. Desde Uruguay se propició la participación de las confederaciones nacionales de cooperativas en el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR, representando al Sector Diversos, lo cual viene extendiéndose y coordinándose entre los movimientos de los cuatro países.

Asimismo, por resolución del órgano ejecutivo del MERCOSUR, Grupo Mercado Común, de fecha 10 de enero de 2001, se constituyó la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM), en la cual nuestro país participa activamente.

En el sentido antes indicado simplemente se advierte que tanto Argentina, Brasil y Paraguay poseen sendas leyes generales de cooperativas desde los años 1973, 1971 y 1994, respectivamente.

I) Perspectiva de la legislación cooperativa comparada y las doctrinas cooperativas internacionales.

No hay duda que es también un mecanismo válido, observar la situación de la legislación cooperativa uruguaya, a la luz de la legislación comparada y las doctrinas internacionales. Como es sabido las cooperativas tienen un reconocimiento en el mundo entero como instrumento de satisfacción de diversas necesidades de la población, como importante fuente de generación de trabajo, y como forma de elevar diversos valores que hacen la convivencia humana más justa y equitativa.

En ese reconocimiento no es menor el trabajo que ha desplegado la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y sus organismos especializados desde hace muchos años. La reafirmación y difusión de un conjunto de valores en los que se sustenta la doctrina y práctica de las cooperativas, y la reformulación de los principios cooperativos como verdaderas reglas de acción de aquellas entidades, han sido una parte muy significativa de ese trabajo.

Ha sido, precisamente, a partir de reconocer aquella doctrina como válida, que se han basado y articulado la mayoría de las regulaciones legislativas de los más diversos países.

La propia ACI, a través del COPAC (Comité para la Promoción y Avance de las Cooperativas) ha emitido en 2001 una serie de "Lineamientos para la Legislación Cooperativa" (Revista ACI N° 34, 2001), y allí se sostienen, entre otros, los siguientes conceptos:

"En cuanto a su contenido la reforma de las leyes cooperativas está marcada por los esfuerzos para restituir los VALORES y PRINCIPIOS cooperativos universalmente reconocidos.

El derecho es reconocido cada vez más como un elemento político estabilizador y un apropiado regulador de las cambiantes relaciones sociales.

No existen movimientos cooperativos que prosperen sin normas legales que les sean aplicables.

Las tres razones que las sustentan son:

- a) la existencia de una ley cooperativa es una condición necesaria pero no suficiente para que una política cooperativa funcione;*
- b) en las sociedades complejas, donde el control social no se basa más en estrechas relaciones personales, la ley ha demostrado ser el medio más apropiado para regular la actividad de los agentes económicos que no están personalmente vinculados el uno con el otro;*

- c) *la ley es un medio adecuado y probado para representar y mantener el justo equilibrio entre la autonomía de los cooperativistas y las cooperativas por un lado, y el alcance del control normativo por parte del Estado, por el otro.*

Las leyes heterogéneas disminuyen la competitividad de los movimientos cooperativos nacionales, dificultan sus operaciones entre países y desaceleran la integración regional. La armonización es tanto una consecuencia como un prerrequisito para la integración económica regional e internacional. Si las cooperativas han de seguir siendo competitivas, la cuestión no es si deben seguir esta tendencia, sino de qué manera pueden salvaguardar sus peculiaridades dentro de dicha tendencia.

La tendencia es hacia una sola ley general que comprenda a todos los tipos de cooperativas porque se cree que:

- *una ley para todo los tipos de cooperativas, posiblemente con partes específicas (por ejemplo: de vivienda, de trabajo, de ahorro y crédito, etc.), garantiza mejor su autonomía;*
- *un bajo nivel de detalle disminuye la burocracia;*
- *una sola ley evita la fragmentación del movimiento cooperativo que podría tener lugar en los casos en que se registrasen distintos tipos de cooperativas bajo diferentes actos y colocados bajo la supervisión de autoridades públicas distintas, tal vez con políticas heterogéneas;*
- *una sola ley genera seguridad jurídica para quienes tratan con las cooperativas;*
- *en el contexto de las limitaciones del desarrollo, una sola ley es la herramienta más adecuada para alcanzar la congruencia entre las metas de las cooperativas orientadas hacia el desarrollo, los asociados y la autosuficiencia.*

La ley debe definir con exactitud que es una cooperativa distinguiéndola de toda otra forma posible de organización de autofinanciamiento. Ello ayuda a:

- *que el gobierno lleve a cabo las funciones normativas del Estado;*
- *distinguir a las cooperativas genuinas de las falsas;*
- *determinar los derechos y obligaciones de los asociados, así como aquellos de los órganos de la cooperativa;*
- *especificar las calificaciones y obligaciones de los funcionarios de las cooperativas respecto de la administración de capital y sirviendo los intereses de los asociados;*
- *establecer normas mínimas relativas a los aspectos contables y de auditoría para incrementar el uso eficiente de los recursos económicos y humanos;*
- *resolver los conflictos que puedan surgir entre la ley cooperativa y la ley laboral y otra ramas del derecho;*
- *establecer criterios para la aplicación y/o exención de impuestos a los asociados y/o a las cooperativas, así como definir cuando se está ante hechos no imposables;*
- *regular la relación entre las entidades privadas y públicas;*

- *facilitar la evaluación del impacto económico, social y político de las cooperativas;*
- *promover la cooperación internacional entre las cooperativas;*
- *favorecer la relación entre las cooperativas y la comunidad en general”*

En cuanto a la forma se aprecia un claro predominio de la tendencia (ya referida en el informe de ACI precedente), a regular el fenómeno cooperativo en forma separada de las sociedades en general (comerciales, civiles) y a otros tipos de asociaciones. A la vez, existen muchos países en los que, además de legislar en forma general, simultánea y complementariamente se ha regulado por tipos de cooperativas.

En cuanto a la expansión internacional alcance con citar que en el ámbito de la Unión Europea son 14 -de los 15 integrantes existentes al año pasado- los Estados que poseen un cuerpo normativo propio y específico para las cooperativas. Por otro lado, en América Latina son 21 los países donde existe una ley general de cooperativas.

También es de destacar la actualización de la legislación cooperativa, que en muchos de estos países se ha ido dando en el transcurso de los últimos años. Evidentemente es innecesario mencionar los motivos que han llevado a ello. Basta solo mencionar algunos ejemplos: en España la primera ley general de cooperativas data del año 1976 y fue luego reformulada en 1987 y 1999; la leyes de cooperativas o adecuaciones de Paraguay, Puerto Rico y México son de 1994; la de Panamá de 1997; la de Canadá de 2000; la de Venezuela de 2001; la de Chile de 2002; la de Costa Rica de 1982 y en estos momentos se encuentra a estudio su reforma por el Poder Legislativo.

En punto a enunciados de otros organismos internacionales acerca de la importancia y tratamiento de las cooperativas, corresponde mencionar, por un lado, la Resolución 51/58 de 12 de diciembre de 1996 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contiene la decisión de su Asamblea General de alentar a los gobiernos a examinar y proponer las medidas legislativas y administrativas que “garantizarán un entorno favorable” para las cooperativas; y, por otro, la Recomendación N° 193 sobre la Promoción de las Cooperativas adoptada en sesión plenaria de la 90ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 20 de junio de 2002, por 436 votos (incluido el de Uruguay), 0 voto en contra y 3 abstenciones, que vino a actualizar la existente Recomendación 167 del año 1966 y recogió, entre otras cosas, la definición de cooperativa y los principios cooperativos adoptados por la ACI en 1995. Asimismo, la precitada Recomendación enuncia: “ ... Los Estados miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas, inspirada en los valores y principios cooperativos ... ” “ ... Los gobiernos deberían facilitar el acceso de las cooperativas a servicios de apoyo con el fin de fortalecerlas y mejorar su viabilidad empresarial y su capacidad para crear empleo y generar ingresos”

III) COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS

A partir del convencimiento de la necesidad de generar un gran marco legal de las cooperativas, que permita englobar la diversidad, a la vez de reconocer las particularidades de las modalidades, se plantea la elaboración de un proyecto de ley general de cooperativas que regule los temas, aspectos e institutos que son comunes a todas, y contenga capítulos específicos en aquellas modalidades (o quizás mejor clases) que se entienda necesario, debiendo ser estos capítulos compatibles y coherentes con la parte general.

Se ha consultado al movimiento cooperativo a través de su organización de tercer grado, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), quien a través de la Comisión Asesora Jurídica ha realizado una serie de actividades que han sido los insumos principales para la elaboración del proyecto de ley que se presenta. Así, corresponde citar, la Jornada de Legislación Cooperativa en Uruguay de noviembre de 2001, y una serie de Seminarios desarrollados durante el año 2002.

A su turno, las principales fuentes de las definiciones cardinales y del proyecto de ley en sí (sin perjuicio de la legislación propia de nuestro país actualmente vigente), han sido las siguientes: el denominado Proyecto de Ley Marco para América Latina propuesto por la Organización de Cooperativas de América (que en adelante denominaremos Ley Marco), la legislación española tanto nacional como autonómica, la legislación argentina, paraguaya, brasileña y otras de América Latina.

RESEÑA DEL PROYECTO DE LEY

El Proyecto de Ley General de Cooperativas ha sido dividido en tres grandes Títulos comprensivos de la parte general, de las cooperativas en particular y de las disposiciones especiales y transitorias.

Siguiendo el Proyecto los puntos en que se ordenará la reseña descriptiva, son los siguientes: I) Disposiciones Generales, II) Constitución, III) Socios, IV) Organización y Administración, V) Régimen Económico, VI) Consejo Superior del Cooperativismo, VII) Asociación, Fusión e Incorporación, VIII) Otras Modalidades de Colaboración Económica, IX) Disolución y Liquidación, X) De las Cooperativas en Particular, XI) Disposiciones Especiales y Transitorias.

I) Disposiciones GENERALES

A) Régimen Aplicable y Derecho Cooperativo

Más allá de disquisiciones doctrinarias el Proyecto consagra la autonomía de las cooperativas y la unificación de la normativa en un mismo cuerpo.

En materia de integración, supletoriamente será aplicable la ley de sociedades comerciales, y en subsidio el derecho común, en cuanto fueren compatibles con la ley cooperativa.

Se entiende conveniente que la ley apunte a consolidar un derecho especial y una sistemática propia de las cooperativas, y, en última instancia, se pueda recurrir a otras ramas del Derecho, como actualmente ocurre en tanto se aplica -en subsidio y en cuanto sea compatible- la legislación de sociedades comerciales.

En tanto exista una ley general de cooperativas que pueda dar solución o reglar en forma específica determinados tópicos que hoy no lo están en forma clara, seguramente se evitarán dudas al momento de aplicarse la ley de sociedades comerciales a las cooperativas.

Aún en el caso de aplicación de la ley de sociedades comerciales en subsidio, el hecho de que se incorporen o regulen cuestiones e institutos propios del Derecho Cooperativo (por ejemplo el acto cooperativo), seguramente será de utilidad para reafirmar las características particulares de la relación existente entre el socio y la cooperativa; y esto podrá traer consigo el fortalecimiento de la naturaleza específica, propia, de las cooperativas, en detrimento de aquella posición que les atribuye naturaleza comercial.

B) Definición

En cuanto al concepto de cooperativa se ha tomado textualmente la definición de la ACI. Así, se establece: "Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada"

Tal definición se entiende válida como punto de partida, en tanto se analice no aisladamente, sino armoniosamente con los demás elementos que caracterizan a las cooperativas en la propia ley.

Las principales razones que nos llevaron a inclinarnos, en principio, por el precitado concepto son: a) ha recogido el apoyo de grandes mayorías; b) es lo suficientemente flexible para que queden incluidas en ella las distintas variedades o tipos de cooperativas; y c) ha sido recogida en documentos como la Recomendación sobre Cooperativas N° 193 de la OIT del 20 de junio de 2002.

C) Principios Cooperativos

Los principios cooperativos que se tomaron emanan de la ACI. Su última formulación data de 1995. Es innegable y no necesita mayor explicación el hecho de que ellos constituyen las pautas de acción de las cooperativas en el mundo entero. Es más: existen juristas que han opinado en el sentido de que algunos de ellos constituyen verdaderos principios jurídicos, a saber: los tres primeros (membresía abierta, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros) ¿Y esto por qué? Porque el resto de los principios pueden llegar a ser compartidos por otras entidades u organizaciones sociales y económicas, pero los tres referidos pertenecen incuestionable y exclusivamente a las cooperativas; son los que imprimen características propias y específicas a las cooperativas, son los que hacen que sean tales.

Los principios recogidos, pues, son:

- 1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios;
- 2) Control democrático de los socios;
- 3) Participación económica de los socios;
- 4) Autonomía e independencia;
- 5) Fomento de la educación cooperativa, entrenamiento e información;
- 6) Cooperación entre cooperativas;
- 7) Compromiso con la comunidad.

De modo de interpretar acabadamente dichos principios, se consigna que tienen los alcances y sentido fijados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual adoptó las doctrinas de la ACI.

D) Caracteres

Se regulan las características principales de las cooperativas que se entiende son:

- 1) Ilimitación y variabilidad del número de socios;
- 2) Plazo de duración ilimitado;
- 3) Variabilidad e ilimitación del capital;
- 4) Autonomía en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.
- 5) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios;
- 6) Reconocimiento de un solo voto a cada socio independientemente de sus aportes, excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado;
- 7) Irrepartibilidad de las reservas sociales y destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación;

Las características antedichas merecen alguna especificación en los capítulos correspondientes a cada tipo de cooperativa; por ejemplo: es lógico consignar que las cooperativas de vivienda tengan un número limitado de socios (que coincidirá con la cantidad de viviendas de cada cooperativa), o que en una cooperativa de trabajo se establezcan condiciones para ser socio relativas a la profesión de las personas.

E) Acto Cooperativo

Se ha entendido por muchos juristas que el “acto cooperativo”, que constituye la relación del socio con su cooperativa, en cumplimiento del objeto social y cuya causa obedece a un fin de servicio y no lucrativo, es un hecho real que ha tenido reconocimiento jurídico.

En nuestro país el legislador recogió expresamente el concepto en el artículo 4º del Decreto-ley 15.645 de 9 de octubre de 1984, referente a Cooperativas Agrarias, estableciendo que: “Actos cooperativos son los realizados entre la Cooperativa y sus miembros en cumplimiento del objeto de aquella.- Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos cuya función económica es la ayuda mutua, no considerándose actos de comercio”.

Por otra parte, un importante sector de nuestra doctrina también ha recogido, explícita o implícitamente, el concepto para diferenciar la actividad de las cooperativas de otros tipos de actos jurídicos (de los “actos de comercio” mayormente) y definir, en consecuencia, la naturaleza de dichas entidades y el régimen jurídico que correspondería aplicarle.

Sobre el alcance del acto cooperativo se puede hablar de tres posibilidades (no excluyentes), a saber: a) el acto practicado entre la cooperativa y sus socios; b) el acto entre cooperativas; y c) el acto entre la cooperativas y terceros, pero en este caso considerado acto cooperativo solo respecto a la cooperativa (denominado acto cooperativo mixto o unilateral). Por lo que conocemos esta última acepción solo la recoge la legislación argentina.

Se incluye la definición de acto cooperativo en el siguiente sentido:

“Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su objeto social y quedan sometidos al derecho cooperativo”.

F) Modalidades

Existe una clásica clasificación en cooperativas de trabajadores y de consumidores o usuarios. En diversas legislaciones (entre ellas la Ley Marco) se acoge la posibilidad de que las cooperativas puedan ser, a la vez, de trabajadores y consumidores y dedicarse a actividades específicas o en forma múltiple.

En principio se recoge el criterio amplio de la Ley Marco, esto es, permitir la existencia de cooperativas de trabajadores y consumidores a la vez (sin la habitual denominación de “mixtas” para evitar la confusión con la figura prevista en el Capítulo de Otras Modalidades de Colaboración) y, en lugar del objeto múltiple, se prevé la posibilidad de la existencia de secciones, con un objeto distinto del principal y con un límite en su volumen de operaciones.

G) Actividades

Se entiende y así se establece que la forma jurídica cooperativa no es óbice para participar en ninguna actividad lícita; esto es, no puede prohibirse la participación de una cooperativa en ninguna actividad.

H) Denominación

Se prohíbe la utilización de los vocablos “cooperativa”, “cooperación” o sus derivados a toda persona (física o jurídica) que no se ajuste a las disposiciones de la ley de cooperativas. Como así también que la denominación de una cooperativa no podrá ser igual o semejante a la de otra preexistente.

I) Asociación con otras personas jurídicas

Se entiende pertinente la posibilidad de que las cooperativas puedan asociarse con personas de otra naturaleza jurídica, así como tener en ellas participación a condición de que sea conveniente para su objeto social, no desvirtúen el mismo, ni transfieran beneficios fiscales que le sean propios, y si el Estatuto lo prevé expresamente.

J) Transformación

Se considera que no es pertinente permitir la transformación de las cooperativas en entidades de otra naturaleza jurídica. Los especiales caracteres de las cooperativas (fin de servicio y no de lucro, un hombre un voto, reparto de excedentes según actividad desarrollada con la cooperativa, destino desinteresado del remanente en caso de liquidación, etc.), llevan a afiliarse a esta posición.

II) CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES DEL ESTATUTO

Se consideró adecuado el actual régimen vigente (ley 16.156 de 29/10/1990), por lo cual se incorporaron sus principales disposiciones al proyecto de ley, con pequeñas modificaciones. Así, en líneas generales, se dispone lo siguiente.

A) Asamblea constitutiva

La constitución de la cooperativa tiene que ser decidida por asamblea en la que se aprobará el estatuto, se suscribirán partes sociales y se elegirán los miembros del primer Consejo Directivo y Comisión Fiscal.

Dicho acto deberá estar contenido en documento público o privado, suscrito por los miembros fundadores y sus firmas deberán estar certificadas notarialmente.

B) Formalidades y Personería Jurídica

La personería jurídica se obtiene con la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas (sección que se crea), del documento de constitución y aprobación del estatuto social, satisfaciéndose de esa forma el requisito de publicidad.

El Registro efectuará el control de legalidad sobre el estatuto social, el que deberá contener las previsiones establecidas en la ley cooperativa.

Más allá de la obtención de la personería jurídica a través del procedimiento referido, cada cooperativa deberá cumplir con las inscripciones y habilitaciones correspondientes, de acuerdo al tipo de actividad que vaya a cumplir (del mismo modo que lo realiza cualquier otra empresa cuya forma jurídica no es cooperativa).

C) Cooperativas en formación

Desde el acto de constitución hasta el de su inscripción la cooperativa estará en formación y por lo tanto los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa, salvo los necesarios para el trámite ante el Registro, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de la

cooperativa en formación. También se prevé que, una vez inscrita la cooperativa, dichos actos podrán ser convalidados si la misma los ratifica. Desde allí en más cesa la responsabilidad solidaria de los directivos, salvo que se haya adoptado la responsabilidad suplementada.

En esta parte se plantea un apartamiento del régimen vigente, en tanto éste establece que la responsabilidad de los directivos será solidaria aún después de obtenida la personería jurídica y mientras se realizan las inscripciones y trámites que correspondan a su respectiva actividad (art. 3º, ley 16.156).

D) Contenido del estatuto

Se establece el contenido mínimo de un estatuto que es el siguiente:

- 1) denominación y domicilio;
- 2) objeto social;
- 3) régimen de responsabilidad;
- 4) capital inicial y valor de las partes sociales;
- 5) organización y funciones de la Asamblea General, y procedimientos y formas de elección de todos los órganos sociales electivos de creación estatutaria;
- 6) condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, y sus derechos y obligaciones;
- 7) forma de distribución de excedentes y asunción de pérdidas, formación de reservas y fondos permanentes;
- 8) fecha de cierre del ejercicio económico;
- 9) normas sobre integración y educación cooperativa;
- 10) procedimiento de reforma de estatuto, disolución y liquidación;
- 11) destino de los bienes para el caso de disolución;
- 12) forma de representación de la cooperativa.

E) Reforma del estatuto

Para la reforma del estatuto se establece el mismo procedimiento que para la inscripción de la cooperativa, y por ende la reforma entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro.

F) Cooperativas constituidas en el extranjero

Las cooperativas del exterior pueden operar en el territorio nacional siempre y cuando se hallen legalmente constituidas en su país de origen, observen los principios cooperativos y demás requisitos incorporados en nuestra ley de cooperativas e inscriban su estatuto social en el Registro.

Ahora bien, si se proponen el ejercicio de actos comprendidos en su objeto social con carácter permanente, estarán sujetas a todas las disposiciones de la Ley nacional, incluyendo los requisitos para su válida constitución como cooperativa.

III) SOCIOS

Este capítulo contiene los derechos y obligaciones de los socios, condiciones de ingreso y egreso, etc.. Veamos:

A) Condiciones

Sin perjuicio de las particularidades de algunas clases (por ejemplo vivienda) se establece como principio que los socios pueden ser personas físicas y/o personas jurídicas, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto; y que el ingreso es libre pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social.

B) Ingreso

La calidad de socio se adquirirá mediante la participación en el acto constitutivo o por resolución del Consejo Directivo a pedido de la persona interesada.

C) Responsabilidad

Se propone como regla que la responsabilidad del socio sea limitada (a los aportes realizados). No obstante, no se descarta la posibilidad de que la responsabilidad pueda ser suplementada; en este caso el estatuto deberá establecer tal cosa y, asimismo, dejar fijado el límite del monto suplementario.

Por la vía de modificación de estatutos sólo se podrá aumentar el grado de responsabilidad de los miembros, no pudiendo efectuarse la transformación inversa.

D) Deberes

Se establece cuáles son los deberes del socio:

- a) Cumplir sus obligaciones sociales y económicas;
- b) Desempeñar los cargos para los que fueren electos, salvo justa causa de excusa;
- c) Respetar y cumplir el estatuto, reglamentos, y resoluciones de los distintos órganos de la cooperativa;
- d) Participar en las actividades que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social;
- e) Ser responsable por el uso y destino de la información de la cooperativa.

E) Derechos

Del mismo modo los derechos. Los básicos son:

- a) Participar con voz y voto en las Asambleas;
- b) Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos de la cooperativa;

- c) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones;
- d) Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y reglamentarias;
- e) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al Consejo Directivo o a la Comisión Fiscal, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Estatuto;
- f) Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto, o los reglamentos ante la Comisión Fiscal.
- g) La renuncia.

F) Pérdida de la calidad de socio

También contiene la ley las razones para que opere la extinción de la calidad de socio, a saber: fin de la existencia de la persona física o jurídica; renuncia presentada ante el Consejo Directivo y aceptada por éste; pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio; y exclusión.

G) Exclusión y Suspensión

Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causales previstas en los estatutos y reglamentos. La adopción de la decisión corresponderá al Consejo Directivo y podrá ser apelada ante la Asamblea. El estatuto deberá establecer el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos que se conceden a los recursos.

H) Límite al reembolso de partes sociales

Al respecto el estatuto puede limitar el reembolso anual de las partes sociales a un monto no superior al 5% del capital integrado conforme con el último balance aprobado. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad.

Los reembolsos podrán suspenderse por un período de hasta dos años en caso de pérdidas ocurridas en el ejercicio económico, según resolución fundada de la Asamblea General.

Tal como se verá en los recursos patrimoniales de las cooperativas, se distingue claramente entre partes sociales (aportaciones de capital) y cuotas sociales (ya sean de admisión, de sostenimiento, etc.); y el reembolso al socio saliente se refiere exclusivamente a las partes sociales.

I) Partes sociales pendientes de reembolso

El principio general ante el retiro de un socio es el reintegro de las partes sociales. La ley establece distinciones respecto a la cuantía (porcentaje) que corresponda reintegrar.

En cualquier caso, el socio sólo tiene derecho al reintegro del valor nominal de su capital integrado, sin perjuicio de los reajustes de las partes sociales que se hayan

realizado de acuerdo a la ley o lo establecido por el estatuto. Desde ya se aprecia que se acepta el mecanismo de reajuste de las partes sociales.

J) Descuentos de Deudas

Previo al reintegro al socio se le deducirán todas las deudas que tuviera con la cooperativa.

IV) ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

Al respecto se plantea la clásica división en los órganos que hoy existen en nuestro régimen vigente, por lo tanto la dirección, administración y vigilancia de las cooperativas deberán estar a cargo de la Asamblea, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal, la Comisión Electoral y demás órganos que establezca el Estatuto. Esto último significa que la ley prevé, en forma opcional, la existencia de otros órganos: Comité Ejecutivo, Comité de Recursos, Comisiones Auxiliares.

A continuación se describen las características y cometidos principales que se proponen para la Asamblea, Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisiones Auxiliares.

A) Asamblea

La Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones deberán adoptarse conforme a la propia ley de cooperativas, el estatuto y el reglamento, y serán obligatorias para los demás órganos y los socios presentes o ausentes.

Respecto de la asamblea ordinaria se considera pertinente que deberá sesionar una vez al año, dentro de los 180 días siguientes al cierre del ejercicio económico para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán, necesariamente incluirse, los siguientes: la memoria anual del Consejo Directivo; los estados contables; forma de distribución de excedentes o financiación de pérdidas; informe de la Comisión Fiscal; elección de los miembros del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral cuando corresponda.

La asamblea extraordinaria podrá reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran

En cuanto a la convocatoria: la Asamblea ordinaria la deberá hacer el Consejo Directivo, o la Comisión Fiscal cuando aquel omitiera hacerlo en el plazo que establezca la ley; la extraordinaria deberá reunirse toda vez que lo disponga el Consejo Directivo, o solicite la Comisión Fiscal o un número de socios no inferior al 10%, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor. También podrá convocar la Comisión Fiscal cuando el Consejo Directivo no responda o responda negativamente a su pedido o al de los socios.

Las formalidades mínimas a ser cumplidas en la convocatoria son: indicación de fecha, hora y lugar de la reunión, y expresa mención de los puntos del orden del día; adecuada publicidad; y una anticipación no menor de 10 días.

En el actual estadio de desarrollo de las cooperativas se entiende pertinente que la ley recoja la existencia de asambleas de delegados; en ese caso deberán estar previstas en el Estatuto por causas objetivas y expresas.

Respecto del quórum necesario para sesionar se considera que en primera convocatoria la asamblea debe sesionar válidamente con la presencia de más de la mitad de los socios o delegados convocados; y en segunda convocatoria, una hora más tarde, podrá sesionar si la asistencia duplica el número estatutario de integrantes titulares del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la ley o el estatuto exigieran mayorías especiales. Para cuestiones de trascendencia vital de la cooperativa deberá requerirse una mayoría especial: se propone 2/3 de los votos para decidir fusión o incorporación, disolución, cambio sustancial del objeto social, cambio de responsabilidad limitada a suplementada y reforma del estatuto.

También recogiendo el régimen vigente, para participar en las asambleas los socios pueden hacerse representar por otro socio o por un miembro de su núcleo familiar, mediante poder escrito. Ningún apoderado podrá representar a más de dos socios.

En cuanto a la distribución de competencias se entiende que la Asamblea debe tener regulada expresamente la materia que le es propia, tendiendo a concentrar en el Consejo Directivo la administración, por lo tanto sobre todo aquello que no esté regulado por la ley o el estatuto, le corresponderá actuar al Consejo Directivo.

El Proyecto prevé los asuntos en los que necesariamente intervendrá la Asamblea, a saber:

- 1) Aprobar, modificar e interpretar el estatuto y los reglamentos de la entidad;
- 2) Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el estatuto;
- 3) Elegir, en su caso, y remover a los miembros del Consejo Directivo y Comisión Fiscal, si hubieren sido electos por la Asamblea;
- 4) Fijar las remuneraciones y compensaciones de los miembros del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y de las Comisiones que se determinen cuando haya lugar;
- 5) Resolver sobre la memoria y los estados contables previo conocimiento de los informes de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere;
- 6) Decidir sobre la distribución de excedentes y financiación de pérdidas;
- 7) Emisión de obligaciones, títulos de inversión, participaciones especiales u otras formas de financiación mediante emisiones de valores negociables;
- 8) Decidir acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Directivo y Comisión Fiscal;
- 9) Decidir sobre la asociación con personas de distinta naturaleza jurídica, públicas o privadas;

10) Resolver sobre fusión, incorporación, disolución, el cambio sustancial del objeto social, el cambio de responsabilidad limitada a suplementada o la reforma del estatuto de la cooperativa;

11) Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de resoluciones del Consejo Directivo, salvo que el estatuto prevea la existencia del Comité de Recursos;

12) Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal;

13) Aprobación de nuevos aportes obligatorios, admisión de aportes voluntarios, actualización del valor de los aportes al capital social, fijación de los aportes de los nuevos socios, y establecimiento de cuotas de ingreso o periódicas.

B) Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa.

Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la ley. Se considera facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserven expresamente a la asamblea y las que resultan necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.

El Consejo Directivo deberá integrarse de un número no inferior a tres, determinado por el estatuto. Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por la asamblea en la forma y por el período de mandato establecido en el estatuto. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento y serán llamados a ocupar el cargo por el consejo directivo.

En aquellas cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, el estatuto podrá establecer la existencia de un Administrador único, persona física que ostente la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en la ley para el Consejo Directivo, su Presidente y Secretario.

La asamblea podrá remover en cualquier tiempo a los miembros del Consejo Directivo, siempre que el asunto figure en el orden del día o sea consecuencia directa del asunto incluido en él. Consumada la remoción, en el mismo acto se elegirá a los reemplazantes, salvo que el estatuto establezca un procedimiento especial al efecto.

El estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo. Las actas de las sesiones deben ser firmadas por los asistentes. El quórum será de más de la mitad de sus miembros.

La representación legal de la cooperativa corresponde al Consejo Directivo el cual podrá delegarla en uno o más de sus miembros conforme establezca el estatuto.

Los miembros del Consejo Directivo deberán responder solidariamente frente a la cooperativa y los socios por violación de la ley, el estatuto y los reglamentos. Sólo podrá eximirse el miembro que no haya participado en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia en acta de su voto en contra.

C) Comité Ejecutivo

El estatuto podrá organizar un comité ejecutivo, integrado por miembros del Consejo Directivo, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. La existencia de este comité no modifica los deberes y responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo. El Estatuto o el Reglamento determinará la división de tareas y competencias entre el Consejo y el Comité.

D) Comisiones Auxiliares

El Consejo Directivo podrá designar de su seno o de entre los socios, comisiones auxiliares de carácter permanente o temporal, y les determinará sus funciones.

En las cooperativas de primer grado, en todo caso, deberá integrarse una Comisión de Educación.

E) Remuneración

Si el estatuto lo prevé, por resolución de asamblea puede ser compensado el trabajo personal realizado por los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Comisión Fiscal, o Comisiones Auxiliares, en el desempeño de sus cargos. Dicha remuneración podrá abonarse además del pago de los gastos incurridos con el mismo motivo.

F) Recursos

Las resoluciones del Consejo Directivo podrán ser recurridas por los socios ante la Asamblea General o, en su caso, el Comité de Recursos, según el procedimiento establecido en el estatuto.

V) REGIMEN ECONOMICO

A) Recursos Patrimoniales

Los recursos patrimoniales de las cooperativas serán: 1) El capital social; 2) Los aportes no capitalizables (cuota de admisión, sostenimiento o solidaridad); 3) Las reservas legales, estatutarias y voluntarias; 4) Las donaciones, legados y recursos análogos que reciban; 5) Los recursos que se deriven de los instrumentos de capitalización y cumplan los requerimientos para ser considerados un rubro patrimonial; 6) Las reservas provenientes de reajustes al patrimonio; 7) Los resultados acumulados.

Los partes sociales (aportaciones de los socios) son indivisibles, de igual valor y transferibles solo entre socios y con acuerdo del Consejo Directivo; deberán ser integradas en dinero o en especie o trabajo convencionalmente valuados, en la forma y plazo que establezca el Estatuto.

B) Régimen de Reservas y Distribución de Excedentes

El régimen de reservas constituye una fuente de financiamiento medular de las cooperativas. Se considera que los excedentes deben destinarse, en un monto significativo, a fortalecerlas patrimonialmente.

Las reservas pueden ser constituidas por disposiciones legales, estatutarias, fiscales o por voluntad de la Asamblea General. Las reservas son irrepartibles y pueden ser afectadas a absorber pérdidas.

En cuanto al tratamiento de los resultados de las cooperativas, la propuesta es la Asamblea determinará el destino del excedente, una vez deducidas las eventuales pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, conforme con las siguientes pautas:

- 1) Quince por ciento, como mínimo, para la constitución de un Fondo Reserva Legal, hasta que este iguale al capital reduciéndose al 10 % a partir de ese momento;
- 2) Cinco por ciento, como mínimo, para educación y capacitación cooperativa;
- 3) Abonar los intereses de aquellos instrumentos de capitalización que correspondan;
- 4) Las sumas que correspondan para la constitución de otras reservas especiales y el pago de interés a las partes sociales, en caso de establecerse, en cuyo caso se tomará la tasa media de colocaciones en plaza;
- 5) El resto será repartido entre los socios en concepto de retorno.

La propuesta que precede recoge principalmente el régimen vigente en nuestro país.

C) Reajuste de las partes sociales

Se considera justo y conveniente el reajuste de las partes sociales de manera de que constituyan una herramienta competitiva frente a otras posibilidades de colocar los aportes de los cooperativistas. En economías inflacionarias, en las cuales de hacerse un aporte en moneda nacional al cabo de algunos años el mismo se desvaloriza, no existe ningún atractivo al aporte de capital (partes sociales), más allá del servicio que brinda la cooperativa.

Debe ser un mecanismo permitido y al respecto se entiende adecuada una solución como la consagrada en sede de cooperativas agrarias, pudiendo los Estatutos establecer el reajuste de las partes sociales.

D) Interés limitado al capital

Al igual que en el punto anterior se entiende que la limitación extrema del pago de interés, puede constituir una desventaja frente a otras alternativas de captación de capital.

En la legislación comparada, las soluciones varían desde limitar el interés (por ejemplo: un interés similar al que abonan los Bancos para depósitos a plazo fijo, un plus sobre el interés "legal", un interés inferior al bancario) hasta dejar en libertad la fijación del mismo.

Sin perjuicio de que el común de los socios lo que busca al integrarse a una cooperativa es el servicio, no hay que constreñir el desarrollo de la misma, y esta vía para las cooperativas de cierto tamaño y volumen puede ser una alternativa.

Se entiende que debiera tomarse como punto de partida la ley 10.761 que no prohíbe el pago de intereses. Por su parte el proyecto de ley dispone que el estatuto podrá establecer la posibilidad del pago de intereses a las partes sociales, en cuyo caso se tomará la tasa media de colocaciones en plaza.

Estos intereses deberán pagarse al distribuir los excedentes en tercer lugar, luego de destinar los porcentajes correspondientes al fondo de reserva legal y al fondo de educación y capacitación cooperativa.

E) Otras alternativas de capitalización y socios inversores

Se incluyen en la ley otras alternativas de fortalecimiento patrimonial que puedan ser competitivas frente a otras opciones de inversión, y fortalezcan a las cooperativas a efectos de brindar los servicios a los asociados.

Se proyecta que el estatuto podrá prever la emisión de participaciones subordinadas, acciones con interés, incorporar la figura del socio colaborador u otros instrumentos que puedan crearse.

Las participaciones subordinadas son aquellos recursos provenientes de socios o de terceros, cuya remuneración está subordinada a los resultados de la gestión de la Cooperativa. Podrán percibir intereses siempre que se obtengan excedentes de gestión.

Las acciones con interés son aquellos recursos aportados por socios o por terceros, que formarán parte del patrimonio de la cooperativa y recibirán una remuneración fija, variable o mixta, en la forma que la cooperativa determine en cada emisión.

Los tenedores de los instrumentos de capitalización no adquieren los derechos de los socios de la cooperativa ni podrán participar en las asambleas ni integrar ningún órgano social a excepción de la Comisión Fiscal, siempre que el estatuto lo prevea.

Las participaciones subordinadas, las acciones con interés u otros instrumentos de capitalización, serán nominativos y transferibles.

Se prevé la existencia de socios colaboradores (excepto para las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito), que podrán tener la calidad de personas físicas o jurídicas, y que sin participar en la actividad propia del objeto social de la cooperativa pueden contribuir a su consecución. Los socios colaboradores deberán desembolsar los aportes económicos que determine la Asamblea General. Al socio colaborador no se le podrán exigir nuevos aportes al capital social, ni podrá desarrollar, como tal, actividades cooperativizadas en el seno de la cooperativa.

F) Suspensión de devolución de partes sociales

Se entiende que en la hipótesis de que el balance de la Cooperativa arrojará pérdidas, debiera existir la posibilidad de suspender por algún lapso el reembolso del capital aportado al socio que se retira o aumentarse las deducciones al reembolso del mismo. Se considera lógica esta solución al encontrarse la cooperativa en una situación de dificultades económicas financieras transitorias, y por ende debiera contar con una herramienta que le permita recuperarse y retomar el cumplimiento normal de sus obligaciones.

Cuando una persona participa en una asociación o sociedad, está a la suerte de esa entidad, tanto a los excedentes como a las pérdidas. Respecto de que el socio que se retira responde de las pérdidas se encuentra una justificación muy amplia en la ley de las sociedades comerciales. Más allá de las diferencias entre las sociedades comerciales y las cooperativas, se considera que el socio de una cooperativa que se retira responde también de las pérdidas de esa cooperativa. Obviamente el socio no responderá nunca más allá de la responsabilidad que asumió.

De forma amplia, el proyecto prevé que los estatutos establezcan los criterios relativos a la forma del reintegro.

G) Aportes Obligatorios resueltos por la Asamblea General

Tratase de la posibilidad de otorgar a la Asamblea General la facultad de exigir nuevos aportes obligatorios para integrar el capital social, otorgando al socio que no esté en condiciones de afrontarlo el derecho de receso. Una solución en este sentido debe compatibilizarse con el principio de puertas abiertas.

Se buscó el equilibrio entre la necesidad de financiamiento, que normalmente tiene la cooperativa, y la asignación al máximo órgano de la posibilidad de resolver nuevos aportes obligatorios para viabilizar el cumplimiento de sus cometidos sociales.

Establece la norma proyectada que el estatuto fijará el aporte obligatorio mínimo al capital social para ser socio, que podrá ser diferente para las distintas clases de socios o para cada socio en proporción al compromiso o uso potencial que cada uno de ellos asuma de la actividad cooperativizada.

La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevos aportes obligatorios. El socio que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos, en todo o en parte, a cubrir los nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea General.

H) Mínimo de capital social

Respecto al mínimo del capital social debiera estarse a las exigencias que tuviera el tipo de actividad (por ejemplo si son de ahorro y crédito, de trabajo, de seguros, etc.). Y, en la medida en que una cooperativa lleve adelante tal o cual actividad, se tiene que someter a las reglas propias de esa actividad, más allá de que

la reglamentación puede establecer diferencias por el carácter especial de las cooperativas.

No se considera conveniente fijar un mínimo, entendiéndose que constituye algo demasiado específico para estipular en una ley general.

I) Prestación de servicios a no socios.

Se acepta que las cooperativas presten servicios a no socios. No obstante, la prestación de servicios a no socios no podrá exceder de la tercera parte de las operaciones que realice anualmente la cooperativa.

Asimismo, dicha prestación no podrá realizarse en condiciones más favorables que a los socios.

Los excedentes de gestión que proporcionalmente deriven de ellas, serán destinados a un fondo con destino afectado para educación cooperativa o servicios sociales conforme prevea el estatuto o decida la Asamblea.

No se considerarán operaciones realizadas con terceros las que se efectúen para:

- a) Servir a socios de otra cooperativa;
- b) Liquidar artículos sobre los que se deje de operar o que podrían desmerecerse con una conservación prolongada;
- c) Servir al público, por motivo de general utilidad, a requerimiento de organismos del Estado;
- d) En el caso de las cooperativas de segundo o ulterior grado aquellas operaciones que se realicen con los socios de sus entidades socias;
- e) Las operaciones que se realicen entre cooperativas.

K) Régimen contable

El ejercicio económico será anual y se cerrará en la fecha establecida por el Estatuto. La contabilidad deberá ser llevada con arreglo a las reglas de contabilidad universalmente aceptadas.

A la fecha de cierre del ejercicio el Consejo Directivo redactará una memoria sobre la gestión realizada la cual, conjuntamente con los estados contables, será sometida a la Asamblea con informe de la Comisión Fiscal, y del auditor si correspondiere.

VI) VIGILANCIA

La Comisión Fiscal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. Debiendo velar para que el

Consejo Directivo cumpla la ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la asamblea.

Se considera que su función deberá limitarse al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que considere transgredidas. Debe dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud al Consejo Directivo, puede convocar a asamblea cuando lo juzgue necesario.

En suma se proyecta la siguiente competencia para la Comisión Fiscal:

- 1) Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa;
- 2) Examinar los libros, títulos y cualquier otro documento cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses;
- 3) Presentar a la Asamblea General ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria y estados contables;
- 4) Suministrar a la Asamblea General toda información que esta le requiera sobre las materias que son de su competencia;
- 5) Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea General los puntos que considere procedentes;
- 6) Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, estatuto, reglamentos y resoluciones de la Asamblea General;
- 7) Investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la Asamblea General y expresar acerca de ellas las consideraciones y propuestas que correspondan; y
- 8) Si el Estatuto lo prevé, asumir transitoriamente el gobierno de la sociedad, cuando por desintegración parcial o total del Consejo Directivo, éste no esté en condiciones de funcionar.

La Comisión Fiscal se compondrá de un número impar de socios, conforme lo determine el estatuto. En las cooperativas con menos de quince socios podrá integrarse por un solo miembro.

Rigen para la Comisión Fiscal las disposiciones sobre remoción, reglas de funcionamiento, suplencia, incompatibilidad y responsabilidad establecidas para el Consejo Directivo.

VII) INTEGRACION

Se plantea, siguiendo la tendencia mayoritaria de la legislación comparada, que las cooperativas tengan la mayor amplitud para realizar alianzas y asociaciones entre ellas y, a la vez, con entidades de otra naturaleza jurídica. En este último caso con la condición de que no pierdan su objetivo de servicio a los socios y no transfieran beneficios que les sean propios.

Así, se propone que las cooperativas puedan asociarse entre sí para intercambiar servicios, celebrar contratos de participación, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada el objeto social, y en fin para llevar a la práctica el principio de integración cooperativa.

Asimismo, las cooperativas podrán asociarse con personas de otra naturaleza jurídica así como tener en ellas participación, siempre que ello no altere su objeto social o viole las disposiciones de la ley, su reglamentación y / o sus estatutos.

Con el mismo sentido las cooperativas podrán fusionarse a los efectos de alcanzar con mayor eficacia sus objetivos sociales. En ese caso, las cooperativas fusionadas se disolverán sin liquidar su patrimonio pero extinguiéndose la personería jurídica. La nueva cooperativa emergente de la fusión, subrogará de pleno derecho a las que le dieron origen en todos sus derechos, acciones y obligaciones.

También procederá la incorporación (o fusión por absorción). Ello ocurrirá cuando una cooperativa absorba a otra u otras conservando la incorporante su personería jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. Aquella igualmente deberá subrogar en los derechos, acciones y obligaciones a las incorporadas.

En el marco que se reseña también será posible la constitución de cooperativas de segundo o ulterior grado. Se opta por una redacción general que establece claramente esta posible forma de integración entre cooperativas, pero dejando amplitud en lo referente a las condiciones en que se instrumenten los acuerdos.

En las cooperativas de segundo o ulterior grado también podrán integrarse en calidad de socios personas jurídicas de otra naturaleza, públicas o privadas, y personas físicas, hasta un máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) del total del capital social de la cooperativa.

En lo atinente a la representación y voto de las cooperativas de segundo o ulterior grado se consigna que éstas pueden adoptar un régimen de representación y voto proporcional, ya sea con relación al número de socios, al uso de los servicios, aportes realizados, u otros criterios; debiéndose, en cualquier caso, asegurar la participación de todos los socios y un máximo que evite el predominio excluyente de algunos de ellos, aspecto que deberá regular el Estatuto.

Para la defensa y promoción de sus intereses en cuanto cooperativas, se prevé que pueden asociarse libre y voluntariamente en federaciones y confederaciones.

VIII) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION

En este capítulo del proyecto se incluyen las causas que podrán generar la disolución de una cooperativa, y los procedimientos a seguir para la liquidación.

Más allá de que se pueda establecer en el Estatuto las causas que darán lugar a la disolución la ley prevé el elenco mínimo de ellas, a saber:

- 1) Decisión de la Asamblea General por mayoría de dos tercios (2/3) de votos presentes;
- 2) Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año;
- 3) Fusión o incorporación;

- 4) Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto;
- 5) Declaración de quiebra;
- 6) Sentencia judicial firme;
- 7) Finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el que fue creada;
- 8) Por otras causales previstas en las disposiciones legales aplicables en razón de la actividad de la cooperativa.

Luego de producida la disolución corresponde pasar a la etapa de liquidación, salvo en los casos de fusión o incorporación, con el fin de realizar los activos de la entidad, cancelar los pasivos y devolver los aportes sociales si correspondiere.

Se aboga por unificar el procedimiento de liquidación (hoy se puede hablar de tres soluciones diferentes: las cooperativas agrarias por un lado, las de vivienda por otro y el resto por otro lado).

Los liquidadores deben comunicar la disolución al Consejo Superior del Cooperativismo y al Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas, para su inscripción.

La liquidación en principio estará a cargo del Consejo Directivo, órgano liquidador que ejerce la representación de la cooperativa y debe realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento "en liquidación".

El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor de los aportes se entregará a la entidad sin fines de lucro que fije el Estatuto Social.

La Comisión Fiscal controlará el proceso de liquidación.

IX) REGIMEN DE REGISTRO Y CONTRALOR

Se entiende conveniente encarar el sistema de control como un apoyo al cumplimiento de los fines sociales, y no solo como un sistema de sanciones aplicables a partir de posibles faltas y eventuales denuncias.

Se opta en el proyecto de ley por un sistema mixto con la participación del Estado y el propio movimiento cooperativo. Asimismo, se considera deseable la combinación de la supervisión externa y un control interno desde los asociados y sus organismos de vigilancia y gestión democrática.

Se reitera entonces la idea de un sistema de complementariedad de roles. El Estado debe tener una responsabilidad en la materia, pero puede delegar funciones en organismos de integración de las cooperativas que estimulen, además, la fiscalización y vigilancia interna.

Es importante, a la vez, diferenciar entre el registro, la promoción y el contralor, teniendo en cuenta un sistema de información que permita reconocer y evaluar el conjunto de la actividad y su impacto social.

Se plantea la creación de un organismo con representantes del Estado y las cooperativas, especializado en el contralor de los diversos tipos de cooperativas, cuyas funciones principales serán el registro estadístico de las cooperativas, el contralor social (cumplimiento de los principios cooperativos), inspecciones, control de libros, etc.

Se participa de la idea de que de acuerdo al giro que realicen las cooperativas, algunas de ellas podrán ser objeto de un contralor especializado. Así, por ejemplo, las cooperativas de intermediación financiera o seguros deberán someterse a las Superintendencias correspondientes.

En base a lo antedicho, se crea en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Consejo Superior del Cooperativismo como órgano desconcentrado, el cual será la autoridad de aplicación y control de la legislación cooperativa.

Dicho organismo ejercerá la política administrativa de las cooperativas y tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, estatutarias y la auditoria contable de las mismas.

Dentro de sus funciones se enumeran las siguientes:

- 1) Promover y fomentar el desarrollo de las cooperativas y del sector cooperativo, y brindar asistencia técnica a las cooperativas coordinando su actividad con las cooperativas de grado superior;
- 2) Velar por el cumplimiento de los principios cooperativos;
- 3) Asesorar en la fijación de la política nacional en materia de cooperativas, y colaborar en su implementación, coordinando con otros organismos oficiales;
- 4) Informar a las autoridades competentes los proyectos de ley y otras normas que incidan sobre las cooperativas;
- 5) Evacuar consultas que le formulen las cooperativas;
- 6) Organizar un servicio estadístico y de información sobre cooperativas, pudiendo requerir información periódica y sistemática de las mismas, directamente o a través de los organismos de integración con que el Consejo establezca convenios;
- 7) Ejercer la supervisión del cumplimiento de las leyes y demás normas aplicables a las cooperativas y especialmente fiscalización pública de las cooperativas, su funcionamiento social y contable, por los medios que señale la reglamentación;
- 8) Impartir a las entidades de revisión o supervisores auxiliares y comisiones fiscales normas sobre el desarrollo de sus funciones y contenido de los dictámenes e informes que deban emitir;
- 9) Imponer sanciones a las cooperativas;
- 10) Dictar las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones;
- 11) Elaborar el proyecto de reglamentación de la ley general de cooperativas;
- 12) Cumplir las funciones de conciliación y arbitraje en los términos que establece la ley cooperativa.

El Consejo Superior del Cooperativismo se integra con dos representantes del Estado, uno de los cuales lo presidirá, y dos representantes del sector cooperativo. Los representantes del Estado serán designados por el Presidente de la República y los del sector cooperativo por CUDECOOP. El Presidente del Consejo tendrá doble voto en caso de empate.

Asimismo, el Proyecto prevé una serie de atribuciones para el cumplimiento de sus cometidos y de sanciones para los casos de infracción a la ley cooperativa.

X) DE LAS COOPERATIVAS EN PARTICULAR

A) Introducción

El Proyecto si bien pretende unificar la normativa aplicable a todos los tipos cooperativos, en determinados puntos no ha podido obviar los particularismos de algunas clases de cooperativas.

Ese reconocimiento de particularismos ha redundado en la previsión, en el Proyecto, de un título donde se dividen por capítulos las normas especiales aplicables a determinadas cooperativas.

A su vez, se deja en claro que las cooperativas que no se acojan a ninguna de las clases reguladas en la ley podrán constituirse con tal de que quede determinada la actividad que desarrollen y den cumplimiento a las prescripciones de la ley, en cuyo caso se aplicará la normativa prevista para la clase de entidades con las que aquéllas guarden mayor analogía.

Cada cooperativa, además de ajustarse a los principios generales de la ley se regirá por las disposiciones especiales aplicables a la clase respectiva que primarán sobre las normas de carácter general.

A continuación se analizan cada uno de los tipos (clases) cooperativos que son incluidos en el título II del Proyecto, dejando constancia de que para su redacción además de acudir a las fuentes del derecho comparado se intentó incluir lo que se consideró adecuado y actual de la dispersa normativa vigente.

B) COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN O TRABAJO ASOCIADO

Son las que tienen por objeto proporcionar a sus asociados puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la actividad económica.

El número de trabajadores no socios no podrá superar el 25 % (veinticinco por ciento) de los miembros de la cooperativa.

La remuneración de los trabajadores socios se relaciona con su doble condición. Percibirán como remuneración mensual la equivalente al salario de la rama de actividad económica donde gira la cooperativa y la cuota parte de los excedentes anuales.

Los socios excluidos no tienen derecho a indemnización por despido.

Para este tipo cooperativo se prevé la exoneración de todo aporte patronal a la Seguridad Social (como ya lo prevé la ley vigente). Asimismo de todo tributo nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Específico Interno (IMESI) y de la Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS).

Se establece una norma programática en que para los casos de empresas que entren en quiebra, liquidación judicial o concurso civil, que motiven la extinción del contrato de trabajo, tendrán prioridad a los efectos de la adjudicación de la empresa como unidad las cooperativas de trabajo que se constituyan con la totalidad o parte del personal de la empresa quebrada o liquidada. En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en su totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización.

Como viene de exponerse, en este capítulo se incluye normativa vigente de larga data en nuestro derecho y casi en su totalidad la Ley de cooperativas de producción o trabajo asociado aprobada por el Poder Legislativo en el mes de junio de 2004.

C) COOPERATIVAS DE CONSUMO

El proyecto las define como aquellas que tienen por objeto, el suministro de bienes y servicios para uso o consumo de sus socios

Las cooperativas de consumo no podrán ser de responsabilidad suplementada.

D) COOPERATIVAS AGRARIAS

En este capítulo se tomó como base la ley de cooperativas agrarias vigente por su modernidad y eficaz aplicación práctica, depurándola de lo que podían significar soluciones contradictorias con la parte general del Proyecto.

Son cooperativas agrarias las que tienen por objeto efectuar o facilitar todas o algunas de las operaciones concernientes a la producción, transformación, conservación, clasificación, elaboración, comercialización, importación o exportación de productos provenientes de la actividad agraria en sus diversas formas, realizada en común o individualmente por sus miembros.

Se entendieron como particularismos de este tipo cooperativo los siguientes: la especificación de su actividad, la necesidad de realizar la actividad agraria para ser socio y la habilitación a tales fines (y a los efectos de asociación y fusión) de las

Sociedades de Fomento Rural, la posibilidad de que los estatutos prohíban la actividad en competencia de sus socios, la calidad de título ejecutivo de los saldos deudores conformados, regulación del envío de producción total o parcial a la Cooperativa, y el mantenimiento de los beneficios vigentes hasta la fecha, la posibilidad de una responsabilidad suplementada ilimitada, la intransferibilidad de la calidad de socio, y una norma de fomento y capacitación a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

E) COOPERATIVAS DE VIVIENDA

En cuanto a las cooperativas de vivienda se tomó como fundamento el capítulo X de la Ley 13.728 y sus leyes modificativas, efectuándose solamente la adecuación de dicha ley a la ley general con innovaciones de escasa importancia respecto del régimen vigente el que se considera sumamente exitoso.

Así, el proyecto define a las cooperativas de viviendas como aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda.

F) COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

En este capítulo el Proyecto tuvo como fuente adicional el proyecto de ley de la Auditoría Interna de la Nación de 2002.

Se consideran cooperativas de Ahorro y Crédito aquellas que tienen por objeto promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros servicios financieros.

Específicamente en este capítulo se las divide en clases: de intermediación financiera (las comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, modificativas y concordantes y están sometidas en lo pertinente al contralor del Banco Central del Uruguay) o de capitalización (aquellas cuyo objeto principal es operar con los aportes sistemáticos de capital de sus asociados, no pudiendo recibir depósitos de sus socios ni de terceros, por lo que no están sometidas al contralor del Banco Central del Uruguay).

Podrán emitir participaciones subordinadas y acciones con interés sólo si está previsto en su estatuto y con ciertos requisitos adicionales.

Este tipo de cooperativas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Estar constituidas inicialmente por un número de personas no inferior a cincuenta y contar con más de doscientos socios activos al vencimiento de dos años contados desde la fecha de su fundación.

- 2) En las cooperativas de capitalización, ningún socio a título individual o conjuntamente con su grupo económico o familiar, podrá ser titular de más de un 10% de las partes sociales de la cooperativa.
- 3) Los pasivos financieros de las cooperativas de capitalización estén contraídos con empresas o instituciones de crédito supervisadas por el Banco Central del Uruguay o, con organismos internacionales de reconocida solvencia técnica o entidades nacionales o extranjeras pertenecientes al movimiento cooperativo, bancos estatales o instituciones sin fines de lucro.
- 4) El monto de los créditos que se otorguen a cada socio individualmente o a su grupo económico o familiar en su conjunto no exceda:
 - a) En el caso de las cooperativas de capitalización, el equivalente al 10% del patrimonio de la entidad.
 - b) En el caso de socio que revista la calidad de cooperativa de cualquier especie o persona jurídica sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15%.
- 5) Tienen un régimen especial de distribución de excedentes;
- 6) Celebren regularmente sus Asambleas Generales Ordinarias anuales, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia de un número de socios no inferior al 10% de los socios activos y el 5% de los mismos o 30 socios activos (el menor de ambos) en segunda convocatoria.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de capitalización deberán presentar sus estados contables ante el Consejo Superior del Cooperativismo, para su correspondiente visación, en las condiciones que el referido Órgano establezca.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de intermediación financiera presentarán sus estados contables ante el Banco Central del Uruguay y entregarán copias de los mismos, con constancia de lo anterior al Consejo Superior del Cooperativismo.

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán establecer servicios de protección de sus ahorros y créditos para el caso de fallecimiento o incapacidad del socio.

G) COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Estas cooperativas son las que tienen por objeto proporcionar asistencia médica a sus afiliados y socios, y en las que el capital social es aportado por los profesionales que trabajan en ellas.

Se regirán por la ley cooperativa, por lo dispuesto en el Decreto - Ley 15.181 de 18 de agosto de 1981 y en general por la legislación sanitaria y de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

H) COOPERATIVAS DE SEGUROS

Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto la actividad aseguradora en cualquiera de sus ramas.

Se regirán por lo dispuesto en la ley cooperativa y por la legislación de seguros en lo pertinente.

I) COOPERATIVAS SOCIALES

Según el Proyecto son cooperativas sociales, las que tienen por objeto el perseguir el interés general de la comunidad mediante la promoción y la plena integración social o laboral de personas y grupos de personas marginadas que sufran cualquier clase de exclusión social.

Para ser calificadas como tales se debe cumplir una serie de requisitos limitantes en cuanto a la gestión económica.

En atención a su naturaleza, el Proyecto declara de interés general el fomento de este tipo de cooperativas, quedando exoneradas de todo tributo nacional o municipal.

XI) DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS

A continuación se enumeran las normas que se encuentran dentro de las Disposiciones Especiales y Transitorias del Proyecto.

A) Registro Nacional de Cooperativas.

Se crea dentro del Registro de Personas Jurídicas, siguiendo la nomenclatura de la Ley Registral, la Sección Registro Nacional de Cooperativas en que se inscribirán los siguientes actos y contratos:

- 1) el acta de constitución y el estatuto de las cooperativas;
- 2) los contratos de uso y goce;
- 3) todos los actos que alteren o modifiquen las inscripciones efectuadas.

B) Control de Asambleas y Elecciones.

Las disposiciones referidas en el Proyecto al control de las asambleas y elecciones regirán, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 12.179 de 29 de julio de 1954 y su decreto reglamentario los que se mantienen vigentes.

C) Vigencia de las Normas de Retenciones.

Dada la variedad de normas que establecen retenciones, la dispersión de las mismas y el arraigo que tienen en las distintas cooperativas vigentes se entendió que correspondía mantener el régimen vigente.

En consecuencia el Proyecto expresamente establece que mantienen su vigencia todas las normas legales que consagran y regulan a favor de las cooperativas, la facultad de utilizar el procedimiento de las retenciones de los haberes y pasividades de sus socios, para el cobro de las partes sociales, cuotas de ahorro o amortización de créditos, cuotas de admisión, sostenimiento y solidaridad o cualquier

otro concepto establecido en dichas normas, ya sea en empresas u organismos privados o públicos.

D) Régimen Tributario.

La materia tributaria de las cooperativas, en función de sus especiales características socio-económicas, de su finalidad económica de servicio (satisfacer necesidades de los asociados) y no de lucro (obtener ganancias para distribuir las), del desarrollo de su actividad fundamentalmente con los propios socios y no con terceros (sólo instrumentalmente), del concepto de acto cooperativo (acto celebrado entre la cooperativa y sus socios en cumplimiento del objeto social, o entre cooperativas), entre otros aspectos, merece un abordaje especial.

Sería conveniente incluso deslindar las exoneraciones tributarias, de aquellas situaciones que en realidad no son estrictamente exoneraciones sino que no constituyen hechos generadores de tributación (por ejemplo, en el Impuesto a las Rentas).

No obstante, se constata en el actual marco legal que -al igual que las normas típicas de Derecho Cooperativo- las normas tributarias, relativas a las cooperativas, presentan una gran dispersión y falta de organicidad y planificación.

En aras a concentrar la atención en las normas específicas de derecho cooperativo, en el proyecto se opta por mantener el actual régimen tributario de las cooperativas; en algún caso remitiéndose a la legislación vigente (v.gr.: ley 14.019 de cooperativas de consumo), y en otros incorporándolo a su capítulo especial en virtud de la derogación de las leyes (que se propone en el último artículo del proyecto) que actualmente los contienen (v. gr.: ley 13.481 de cooperativas de producción o trabajo, ley 13.728 de cooperativas de vivienda, decreto-ley 15.645 de cooperativas agrarias).

Asimismo, para no generar desigualdades, se propone extender el mismo régimen vigente de las cooperativas de consumo y sus asimiladas y actualmente reguladas por la misma legislación (v. gr.: cooperativas de seguros, de garantías recíprocas), a las demás cooperativas de consumidores o de consumidores y trabajadores a la vez (siguiendo la nomenclatura del proyecto).

En cualquiera de los casos, será condición "sine qua non" que funcionen con arreglo a las disposiciones de la nueva ley.

E) Transformación de Federaciones.

Se establece que las entidades de segundo o tercer grado existentes a la fecha de promulgación de la ley que se proyecta, representativas de las cooperativas, que no posean la forma jurídica cooperativa, tendrán la facultad de transformarse en cooperativa de segundo o ulterior grado según corresponda.

F) Enseñanza del cooperativismo.

El Proyecto establece que los Órganos Competentes de la Educación, en coordinación con el Consejo Superior del Cooperativismo, deberán elaborar los programas curriculares de los niveles primario, secundario y terciario, a los efectos de que incorporen progresivamente la enseñanza y la práctica del cooperativismo, así como la formación de los docentes respectivos.

G) Sociedades de Fomento Rural y Comisión Nacional de Fomento Rural.

Las Sociedades de Fomento Rural y la Comisión Nacional de Fomento Rural en tanto entidades cooperativas se regirán por sus leyes especiales sin perjuicio de la aplicación de la ley cooperativa en lo no previsto por ellas y en cuanto sea compatible.

H) Funcionamiento del Consejo Superior del Cooperativismo.

Mientras no se asignen los recursos materiales y humanos al Consejo Superior del Cooperativismo, las funciones fundamentales del mismo serán realizadas por la Auditoría Interna de la Nación, en coordinación técnica con dicho Consejo.-

I) Adaptación de las cooperativas a las previsiones de la Ley.

Las cooperativas, constituidas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley que se proyecta, dispondrán de un plazo de dos años a partir de esa fecha para adaptar sus estatutos a lo establecido en la misma.

La reforma del estatuto deberá adoptarse en Asamblea General Extraordinaria, siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes.

Transcurridos los dos años no se inscribirá en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas ningún documento de las cooperativas que no hayan regularizado sus estatutos sociales, y serán pasibles de sanciones.

Para las cooperativas de ahorro y crédito, las disposiciones de su capítulo especial serán aplicables de pleno derecho a las cooperativas ya constituidas o en trámite de constitución a la fecha de vigencia de la ley que se proyecta.

J) Derogaciones.

En función de las características, ya referidas, del actual marco legal de las cooperativas, lo concerniente a las derogaciones debe abordarse con sumo cuidado. En el Proyecto se combinan los métodos expreso y mixto.

En consecuencia, se dispone la derogación expresa de todas aquellas normas que se consideran contrarias a la nueva norma, y, concomitantemente, la conocida

formula de que también se derogan las normas que, sin haber sido mencionadas, se opongan a la nueva ley.

Aún admitiéndose la crítica de que el método mixto es pleonástico, se considera que puede reforzar la voluntad de crear un nuevo marco regulatorio de las cooperativas.

COMENTARIOS FINALES

Como se ha dicho, el legislador nacional tradicionalmente ha regulado a las cooperativas por modalidades (como se acostumbra a llamarles de acuerdo a si son de producción, consumo, ahorro y crédito, vivienda, agrarias o agroindustriales). Esta forma se encuentra muy arraigada entre nosotros, por lo cual se ha realizado un esfuerzo por dotar a la parte general de definiciones y conceptos abarcadores de todas las clases de cooperativas, y respetar, a la vez, los particularismos lógicos de acuerdo al tipo de actividad que ellas realizan.

Ahora bien, se entiende que la caracterización de las cooperativas debe basarse en sus peculiaridades, en su especificidad; sin por ello desconocer que desarrollan su actividad en un mundo profundamente interrelacionado y globalizado, lo cual acarrea consigo la cuestión de que no aparece conveniente que se cree a las cooperativas un cuerpo jurídico cerrado, estanco, e impermeable a las demás ramas del derecho.

En esa búsqueda las formulaciones generales del Proyecto se acercan más que nada a los tipos de cooperativas de trabajadores o de consumidores (o usuarios), y los capítulos especiales se distinguen de acuerdo al objeto social (actividad) que aquellas desarrollen.

En el entendido antes referido se considera que los basamentos del proyecto son: la propia definición de cooperativa, los principios cooperativos, el acto cooperativo y la descripción expresa y detallada de sus caracteres.

Asimismo, con el fin de dar solución a los diversos problemas jurídicos a los que se ven enfrentadas las cooperativas, por razón en gran medida de la legislación que hoy las regula, y lograr, a la vez, homogeneidad en su tratamiento, se ha procurado dejar plasmado en forma obligatoria una serie de elementos e institutos. Otros aspectos, que refieren más a las formas en que cada cooperativa pone en práctica aquellos, se han dejado -dentro de ciertos márgenes- para que sean regulados por los Estatutos de cada cooperativa (por ejemplo: régimen de responsabilidad; procedimientos y formas de elecciones; procedimiento de reforma de los estatutos; reembolso de partes sociales; asambleas de delegados; composición del Consejo Directivo; representación; existencia o no de ciertos órganos: Comité Ejecutivo, Comité de Recursos, Comités Auxiliares; remuneración de directivos; instrumentos de capitalización; reajuste de partes sociales; interés a las partes sociales; voto ponderado en cooperativas de segundo grado).

En definitiva, el proyecto que se ha glosado en forma sucinta, es el producto de diversos debates y trabajos técnicos desarrollados en conjunto con el movimiento

cooperativo. Asimismo, procura recoger una concepción moderna del fenómeno económico-social que intenta regularse (sin desconocer sus raíces ni sus principios tradicionales) y una determinada concepción ontológica del cooperativismo y la cooperación.

PROYECTO DE LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

INDICE

- TÍTULO I.- PARTE GENERAL -

CAPITULO	I.-	DISPOSICIONES
GENERALES	-	CAPITULO II.-
CONSTITUCIÓN	-	CAPÍTULO III.- SOCIOS
CAPÍTULO IV.-	ORGANIZACIÓN Y	
ADMINISTRACIÓN	-	Sección I.- Asamblea
		General
		- Sección II.- Consejo Directivo
		- Sección III.- Comité Ejecutivo
		- Sección IV.-
		Comité de Recursos
		- Sección V.-
		Comisiones Auxiliares
		- Sección VI.-
		Recursos
		- Sección VII.- Comisión Fiscal
		- Sección VIII.- Comisión Electoral
		- Sección
		IX.- Remuneración
		- CAPÍTULO V.-
		RÉGIMEN ECONÓMICO
		- Sección I.-
		Patrimonio Social
		- Sección II.- Capital Social
		- Sección III.- Aportes no Capitalizables
		- Sección IV.- Reservas legales, estatutarias y
		voluntarias
		- Sección V.- Legados y
		donaciones
		- Sección VI.- Otros instrumentos
		de capitalización
		- Sección VII.- Reajustes
		Patrimoniales
		- Sección VIII.- Resultados
		Acumulados
		- Sección IX.- Derechos de

propiedad sobre los recursos patrimoniales -
Sección X.- Recursos no Patrimoniales -
Sección XI.- Régimen Documental y Contable
- **CAPÍTULO VI.- CONSEJO SUPERIOR
DEL COOPERATIVISMO** - Sección I.- Del
Consejo Superior del Cooperativismo -
Sección II.- Conciliación y Arbitraje e
Intervención Judicial - **CAPÍTULO VII.-
ASOCIACIÓN, FUSIÓN, INCORPORACIÓN**
- **CAPÍTULO VIII.- OTRAS MODALIDADES
DE COLABORACIÓN ECONÓMICA** -
**CAPITULO IX.- DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN** -

**- TITULO II.- DE LAS COOPERATIVAS EN
PARTICULAR -**

**CAPITULO I.- CLASES DE
COOPERATIVAS** - Normas comunes -
**CAPITULO II.- COOPERATIVAS DE
PRODUCCIÓN O TRABAJO ASOCIADO** -
**CAPITULO III.- COOPERATIVAS DE
CONSUMO** - **CAPITULO IV.-
COOPERATIVAS AGRARIAS** - **CAPITULO
V.- COOPERATIVAS DE VIVIENDAS** -
Sección I.- Disposiciones generales - Sección
II.- De las Unidades Cooperativas de
Vivienda - Sección III.- De los usuarios -
Sección IV.- De los Propietarios.- Sección V.-

De las Cooperativas Matrices de Vivienda -
Sección VI.- De los Institutos de Asistencia
Técnica - **CAPITULO VI.- COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CRÉDITO - CAPITULO VII.-
COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE
LA SALUD - CAPITULO VIII.-
COOPERATIVAS DE SEGUROS -
CAPITULO IX.- COOPERATIVAS DE
GARANTÍA RECÍPROCA- CAPITULO X –
COOPERATIVAS SOCIALES - CAPITULO
XI.- COOPERATIVAS DE SERVICIOS
EMPRESARIALES Y DE PROFESIONALES**

**- TITULO III.- DISPOSICIONES
ESPECIALES Y TRANSITORIAS -**

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

**TÍTULO I
PARTE GENERAL**

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Art. 1.- Objetivo de la Ley.-

La presente ley tiene por finalidad regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.

Art. 2.- Autonomía.-

El Estado garantizará y promoverá el libre desarrollo y la autonomía de las cooperativas.

Art. 3.- Régimen y Derecho Cooperativo.-

Las cooperativas y demás organizaciones previstas por esta Ley se regirán por sus disposiciones y, en general, por el derecho cooperativo. Supletoriamente se regirán por la ley de sociedades comerciales, y en subsidio por las normas del derecho común, en cuanto fueran compatibles.

Art. 4.- Concepto.-

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una entidad constituida al amparo de la presente Ley.

Las cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primer, segundo y ulteriores grados, de acuerdo con las especificidades previstas en esta Ley.

Art. 5.- Denominación.-

La denominación de la sociedad incluirá necesariamente la palabra "Cooperativa" o su abreviatura "Coop.", con el agregado de la palabra "Suplementada" en los casos en que la responsabilidad de la Cooperativa sea tal, e indicar la naturaleza de la actividad principal.

El empleo del vocablo "cooperativa", o el de "cooperación" o sus derivados, ya sea como denominación, marca o nombre comercial, queda prohibido a toda persona que no se ajuste a las disposiciones de la presente ley.

La denominación no podrá ser igual o semejante a la de otra cooperativa preexistente.

Art. 6.- Domicilio y Sede.-

El domicilio de la cooperativa será dentro del territorio nacional, en el lugar donde centralice su gestión administrativa y dirección.

La sede de la sociedad será la ubicación precisa de su administración dentro del domicilio.

En caso de existir sucursales, podrán tener domicilio y sede propios.

Art. 7.- Principios.-

Las cooperativas deben observar los siguientes principios:

- 1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios;
- 2) Control democrático de los socios;
- 3) Participación económica de los socios;
- 4) Autonomía e independencia;
- 5) Fomento de la educación cooperativa, entrenamiento e información;
- 6) Cooperación entre cooperativas;
- 7) Compromiso con la comunidad.

Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos fijados por la Recomendación número 193 del 20 de junio de 2002 de la Organización Internacional del Trabajo.

Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios generales y aportan un criterio de interpretación de la presente ley.

Art. 8.- Caracteres.-

Las cooperativas deben reunir los siguientes caracteres:

- 1) Ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado;
- 2) Plazo de duración ilimitado;
- 3) Variabilidad e ilimitación del capital;
- 4) Autonomía en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.
- 5) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios;
- 6) Reconocimiento de un solo voto a cada socio independientemente de sus aportes, excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado;
- 7) Irrepartibilidad de las reservas sociales y destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación;

Art. 9.- Acto cooperativo.-

Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su objeto social y quedan sometidos al derecho cooperativo.

Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rigen por la legislación laboral.

Art. 10.- Modalidades.-

Las cooperativas de acuerdo a que la relación del socio con la misma sea de consumidor o de trabajador, serán de consumidores o de trabajadores, respectivamente. También podrán ser de consumidores y trabajadores a la vez.

Art. 11.- Asociación entre Cooperativas o con otras personas jurídicas.-

Las cooperativas pueden asociarse entre sí o con personas de otra naturaleza jurídica, así como tener en ellas participación, si así lo prevé el estatuto, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no transfieran beneficios fiscales ni legales que le sean propios.

Art. 12.- Transformación.-

Las cooperativas no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Es nula toda resolución en contrario.

CAPITULO II CONSTITUCIÓN

Art. 13.- Asamblea Constitutiva.-

Las cooperativas se constituirán mediante documento público o privado con firmas certificadas notarialmente. Dicha constitución será decidida por Asamblea en la que se aprobará el estatuto, se suscribirán partes sociales y en la que se elegirán los miembros de todos los órganos sociales

Art. 14.- Formalidades y Personalidad Jurídica.-

La cooperativa será persona jurídica desde la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas, prevista en esta ley,

de un testimonio notarial del documento de constitución y aprobación del estatuto social, con lo cual se satisface el requisito de publicidad.

El Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, efectuará el control de legalidad sobre el estatuto social el que deberá contener las previsiones establecidas en la presente ley.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente las cooperativas deberán cumplir también con las inscripciones y trámites correspondientes a los efectos de obtener las autorizaciones de las actividades que desarrollarán.

Art. 15.- Cooperativas en formación.-

Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de la obtención de su personalidad jurídica, salvo los necesarios para el trámite ante el Registro, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de la cooperativa en formación.

Una vez inscrita la cooperativa dichos actos podrán ser convalidados si la misma los ratifica.

En tanto no se produzca la inscripción registral, la entidad deberá añadir a su denominación las palabras “en formación”.

Art. 16.- Contenido del estatuto.-

El estatuto debe contener las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás establecidas en esta ley:

- 1) denominación y domicilio;
- 2) designación precisa del objeto social;
- 3) régimen de responsabilidad;
- 4) capital inicial, y valor de las partes sociales;
- 5) organización y funciones de la Asamblea General, y procedimientos y formas de elección de todos los órganos sociales electivos de creación estatutaria;
- 6) condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, y sus derechos y obligaciones;
- 7) forma de distribución de excedentes y asunción de pérdidas, formación de reservas y fondos permanentes;
- 8) fecha de cierre del ejercicio económico;
- 9) normas sobre integración y educación cooperativa;
- 10) procedimiento de reforma de estatuto, disolución y liquidación;
- 11) destino de los bienes para el caso de disolución;
- 12) forma de representación de la cooperativa.

Art. 17.- Reforma del estatuto.-

Cualquier reforma del estatuto se tramitará bajo el mismo procedimiento establecido para la inscripción de la cooperativa. La reforma entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Art. 18.- Cooperativas constituidas en el extranjero.-

Las cooperativas constituidas en el extranjero serán reconocidas de pleno derecho en el país si se hallan legalmente constituidas en su país de origen, observan los principios cooperativos y demás requisitos incorporados en esta ley e inscriben su estatuto social en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas. Podrán celebrar actos aislados y estar en juicio.

La capacidad reconocida a las cooperativas extranjeras no podrá ser mayor a las creadas en el país.

Si se propusieran el ejercicio de actos comprendidos en su objeto social con carácter permanente, estarán sujetas a todas las disposiciones de la Ley nacional, incluyendo a los requisitos para su válida constitución como cooperativa.

Las cooperativas extranjeras no se beneficiarán de las exoneraciones o beneficios de carácter tributario ni de otras prerrogativas legales conferidas a las cooperativas nacionales en su carácter de tales.

CAPÍTULO III SOCIOS

Art. 19.- Condiciones.-

Pueden ser socios las personas físicas mayores de edad, los menores de edad por medio de sus representantes legales y las personas jurídicas de carácter público o privado, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. El ingreso es libre pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social.

Art. 20.- Ingreso.-

La calidad de socio se adquiere mediante la adhesión en el acto constitutivo o por el cumplimiento de las condiciones exigidas en el Estatuto, las cuales deberán ser homologadas por el Consejo Directivo.

Art. 21.- Responsabilidad.-

Las cooperativas deberán establecer en sus estatutos la responsabilidad económica de los socios para con la cooperativa y con terceros, debiendo optar por alguna de las siguientes:

- a- responsabilidad limitada: en este caso la responsabilidad de los socios queda limitada al aporte suscrito.
- b- responsabilidad suplementada: en este caso los socios serán responsables, además, por un monto suplementario que deberá ser siempre determinado en el estatuto y no superior a veinte veces el importe del aporte suscrito.

Por la vía de modificación de estatutos sólo se podrá aumentar el grado de responsabilidad de los miembros, no pudiendo efectuarse la transformación inversa.

Aquellos socios que disientan con las resoluciones que impliquen aumento de su responsabilidad, cualesquiera sean las previsiones estatutarias, tendrán derecho a renunciar a la Cooperativa y al reembolso de las correspondientes partes sociales de acuerdo a lo previsto en esta ley

En el caso del literal B) la responsabilidad de los socios es subsidiaria de la responsabilidad de la Cooperativa.

Art. 22.- Deberes.-

Sin perjuicio de los demás que se establecen en esta ley y en el estatuto, los socios tienen los siguientes deberes:

- a) Cumplir sus obligaciones sociales y económicas;
- b) Desempeñar los cargos para los que fueren electos, salvo justa causa de excusa;

- c) Respetar y cumplir el estatuto, reglamentos, y resoluciones de los distintos órganos de la cooperativa;
- d) Participar en las actividades que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social;
- e) Ser responsable por el uso y destino de la información de la cooperativa.

Art. 23.- Derechos.-

Sin perjuicio de los demás que establezcan esta ley y el estatuto, los socios tendrán los siguientes derechos:

- a) Participar con voz y voto en las Asambleas, sin perjuicio de las disposiciones específicas de los capítulos del Título II de esta ley o de lo que establezca el Estatuto;
- b) Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos de la cooperativa;
- c) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones;
- d) Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y reglamentarias;
- e) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al Consejo Directivo o a la Comisión Fiscal, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Estatuto;
- f) Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto, o los reglamentos ante la Comisión Fiscal.
- g) La renuncia, sin perjuicio del derecho de la Cooperativa de exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes por los mecanismos legales previstos.

Art. 24.- Pérdida de la calidad de socio.-

La calidad de socio se extingue por:

- a) Fin de la existencia de la persona física o jurídica;
- b) Renuncia presentada ante el Consejo Directivo y aceptada por éste;
- c) Pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio;
- d) Exclusión.

Art. 25.- Exclusión - Suspensión.-

Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causales previstas en el estatuto y reglamentos. La decisión corresponde adoptarla al Consejo Directivo y podrá ser apelada ante la Asamblea, previa solicitud de reconsideración.

El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos con que se conceden los recursos.

Serán excluidos los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo, según esta ley o el estatuto de la cooperativa, por el Consejo Directivo, de oficio, o a petición de cualquier otro socio.

Asimismo, podrán ser excluidos aquellos que hayan incurrido en incumplimiento grave.

El estatuto podrá prever la suspensión de los derechos consagrados en los literales a) a d) del artículo 23, del socio que no hubiere operado con la cooperativa durante el último ejercicio o por otras causales que establezca el Estatuto, salvo causas imputables a aquella, caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 26.- Reembolso de partes sociales.-

El estatuto puede limitar el reembolso anual de las partes sociales a un monto no superior al 5% del capital integrado conforme con el último balance aprobado. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad.

Los reembolsos podrán suspenderse por un período de hasta dos años en caso de pérdidas ocurridas en el ejercicio económico, según resolución fundada de la Asamblea General.

Art. 27.- Partes sociales pendientes de reembolso.-

Cualquiera fuera la causa de retiro, el socio o sus sucesores sólo tienen derecho al reintegro del valor nominal de su capital integrado, sin perjuicio de los reajustes de las partes sociales que se hayan realizado de acuerdo a esta ley y de lo establecido por el estatuto.

Art. 28.- Liquidación de cuentas.-

Ninguna liquidación definitiva en favor del socio será practicada sin haberse descontado previamente todas las deudas que tuviera con la cooperativa.

CAPÍTULO IV ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Art. 29.- Órganos.-

La dirección, administración y vigilancia de la cooperativa están a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal, la Comisión Electoral y demás órganos que establezca el estatuto.

Sección I

Asamblea General

Art. 30.- Naturaleza de la Asamblea y clases.-

La Asamblea General es la reunión de los socios de la cooperativa a los efectos de adoptar las decisiones que le competen de acuerdo con lo que establecen las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

La Asamblea General, que será ordinaria o extraordinaria, es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a esta ley, el estatuto y el reglamento, obligan a los demás órganos y a los socios presentes o ausentes.

Art. 31.- Asamblea Ordinaria.-

La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los 180 días siguientes al cierre del ejercicio económico para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán incluirse:

- 1) la memoria anual del Consejo Directivo;
- 2) los estados contables;
- 3) forma de distribución de excedentes o financiación de pérdidas;
- 4) informe de la Comisión Fiscal;
- 5) elección de los miembros del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral cuando el estatuto así lo estableciere.

Art. 32.- Asamblea Extraordinaria.-

La Asamblea podrá reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto de su competencia, aún de los que regularmente corresponde tratar en sesiones ordinarias.

Art. 33.- Convocatoria.-

La Asamblea Ordinaria será convocada por el Consejo Directivo o la Comisión Fiscal cuando aquel omitiera hacerlo en el plazo legal.

La Asamblea extraordinaria se reunirá toda vez que lo disponga el Consejo Directivo, o lo solicite la Comisión Fiscal o un número de socios no inferior al 10%, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor.

También puede convocarla la Comisión Fiscal cuando el Consejo Directivo no respondiera o respondiera negativamente a su pedido o al de los socios.

Art. 34.- Forma.-

En todos casos la convocatoria, que deberá indicar, al menos, fecha, hora y lugar de la reunión, y expresa mención de los puntos del orden del día, debe realizarse con adecuada publicidad y una anticipación no menor de diez días en la forma prevista por el estatuto.

La Asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando participen en ella todos los socios.

Son nulas las deliberaciones sobre temas ajenos al orden del día.

Art. 35.- Asamblea de delegados.-

En sustitución de las Asambleas Generales el estatuto podrá prever, por causas objetivas y expresas, Asambleas de Delegados, los cuales deberán ser elegidos conforme con el procedimiento previsto en él y los reglamentos.

Art. 36.- Quórum.-

En primera convocatoria la Asamblea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los socios o delegados convocados; en segunda convocatoria, una hora más tarde, podrá sesionar si la asistencia duplica el número estatutario de integrantes titulares del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

Art. 37.- Mayoría.-

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la ley o el estatuto exigieran mayorías especiales.

Se requerirá mayoría especial de dos tercios (2/3) de votos presentes para decidir la fusión o incorporación, la disolución, el cambio sustancial del objeto social, el cambio de responsabilidad limitada a suplementada o la reforma del estatuto.

En la Asamblea de socios, estos podrán hacerse representar por otro socio o por un miembro de su núcleo familiar, mediante poder escrito.

Ningún apoderado podrá representar a más de dos socios.

Art. 38.- Competencia.-

Es de competencia exclusiva de la Asamblea General, sin perjuicio de otros asuntos que esta ley o el estatuto le reserven:

- 1) Aprobar, modificar e interpretar el estatuto y los reglamentos de la entidad;

- 2) Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el estatuto;
- 3) Elegir, en su caso, y remover a los miembros del Consejo Directivo y Comisión Fiscal, si hubieren sido electos por la Asamblea;
- 4) Fijar las remuneraciones y compensaciones de los miembros del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y de las Comisiones que se determinen cuando haya lugar;
- 5) Resolver sobre la memoria y los estados contables previo conocimiento de los informes de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere;
- 6) Decidir sobre la distribución de excedentes y financiación de pérdidas;
- 7) Emisión de obligaciones, títulos de inversión, participaciones especiales u otras formas de financiación mediante emisiones de valores negociables;
- 8) Decidir acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Directivo y Comisión Fiscal;
- 9) Decidir sobre la asociación con personas de distinta naturaleza jurídica, públicas o privadas;
- 10) Resolver sobre fusión, incorporación, disolución, el cambio sustancial del objeto social, el cambio de responsabilidad limitada a suplementada o la reforma del estatuto de la cooperativa;
- 11) Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de resoluciones del Consejo Directivo, salvo que el estatuto prevea la existencia del Comité de Recursos;
- 12) Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal;
- 13) Aprobación de nuevos aportes obligatorios, admisión de aportes voluntarios, actualización del valor de los aportes al capital social, fijación de los aportes de los nuevos socios, y establecimiento de cuotas de ingreso o periódicas.

Sección II Consejo Directivo

Art. 39.- Concepto y Naturaleza.-

El Consejo Directivo es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa.

Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la ley.

Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserven expresamente a la Asamblea y las que resultan necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.

Art. 40.- Composición y elección.-

El Consejo Directivo se compondrá de un número impar de miembros no inferior a tres, determinado por el estatuto, debiendo existir, en todo caso, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por el procedimiento y período que establezca el estatuto, el que deberá establecer también si son o no reelegibles.

Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento o cualquier tipo de vacancia y serán llamados a ocupar el cargo por el Consejo Directivo.

En aquellas cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, el estatuto podrá establecer la existencia de un Administrador único, persona física que ostente la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en esta ley para el Consejo Directivo, su Presidente y Secretario.

Los miembros del Consejo Directivo deberán declarar al inicio de su mandato, o durante su ejercicio y según lo que establezcan los estatutos, las actividades personales o comerciales que desarrollan y que puedan ser competencia de las actividades de la cooperativa.

Art. 41.- Remoción.-

La Asamblea General puede remover en cualquier tiempo a los miembros del Consejo Directivo, siempre que éstos hayan sido electos por la Asamblea y que el asunto figure en el orden del día. Consumada la remoción, asumirán los cargos los suplentes respectivos. En caso de remoción de estos también, la Asamblea en el mismo acto, mediante voto secreto y por un plazo que fijará la misma, elegirá a los reemplazantes, salvo que el estatuto establezca un procedimiento especial al efecto.

El Estatuto deberá prever la forma y procedimiento de remoción, en aquellos casos en que el propio Estatuto haya previsto el procedimiento eleccionario por forma diferente a la elección directa por la Asamblea General.

Art. 42.- Reglas de funcionamiento.-

El estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo.

Las actas de las sesiones deben ser firmadas por Presidente y Secretario, salvo que el estatuto requiera también la firma de otros asistentes.

El quórum será de más de la mitad de sus miembros.

Art. 43.- Representación.-

La representación legal de la cooperativa corresponderá al Presidente y Secretario del Consejo Directivo, debiendo actuar conjuntamente, salvo que el Estatuto dispusiera otra cosa al respecto.

Art. 44.- Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo. -

Los miembros del Consejo Directivo responden solidariamente frente a la cooperativa y los socios por violación de la ley, el estatuto y los reglamentos.

Sólo puede eximirse el miembro que no haya participado en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia en acta de su voto en contra.

Sección III Comité Ejecutivo

Art. 45.- Comité Ejecutivo.-

El estatuto podrá organizar un Comité Ejecutivo, integrado por miembros provenientes del Consejo Directivo, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. La existencia de este Comité no modifica los deberes y responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo.

Sección IV Comité de Recursos

Art. 46.- Comité de Recursos. -

El estatuto podrán prever la existencia de un Comité de Recursos, delegado de la Asamblea General, que tramitará y resolverá cuantos recursos vengan atribuidos a su conocimiento o al de la Asamblea, por vía legal o estatutaria.

La composición y régimen de funcionamiento del Comité de Recursos se fijarán por el estatuto. Estará integrado, al menos, por tres miembros de entre los socios con plenitud de derechos elegidos en votación secreta de acuerdo al procedimiento que establezca el estatuto.

Las resoluciones del Comité de Recursos podrán recurrirse, sin efecto suspensivo, por el procedimiento previsto en el artículo 48 de esta ley.

Deberán abstenerse de intervenir, en la tramitación y resolución de los correspondientes recursos, los miembros del Comité que tengan, respecto al socio o aspirante a socio afectado, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, o relación de dependencia. Asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el objeto del recurso.

No podrán formar parte del Comité de Recursos los miembros del Consejo Directivo, ni de la Comisión Fiscal, ni las personas que tengan relación de dependencia con la cooperativa.

Sección V Comisiones Auxiliares

Art. 47.- Comisiones Auxiliares. -

El Consejo Directivo podrá designar de su seno o de entre los socios, Comisiones Auxiliares de carácter permanente o temporal y les determinará sus funciones.

En las cooperativas de primer grado, en todo caso, deberá integrarse una Comisión de Educación.

Sección VI Recursos

Art. 48.- Recursos. -

Las resoluciones del Consejo Directivo podrán ser recurridas por los socios ante la Asamblea General o, en su caso, el Comité de Recursos, según el procedimiento establecido en el estatuto.

Sección VII Comisión Fiscal

Art. 49.- Naturaleza y atribuciones.-

La Comisión Fiscal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. Debe velar para que el Consejo Directivo cumpla la ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.

Art. 50.- Alcances de sus funciones.-

Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que considere transgredidas. Debe dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud al Consejo Directivo, puede convocar a Asamblea General cuando lo juzgue necesario.

Art. 51.- Funciones Específicas.-

Sin perjuicio de las demás funciones señaladas en esta ley y en el estatuto, la Comisión Fiscal debe:

- a) Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto sus miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo Directivo. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa;
- b) Examinar los libros, títulos y cualquier otro documento cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses;
- c) Presentar a la Asamblea General ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria y estados contables;
- d) Suministrar a la Asamblea General toda información que esta le requiera sobre las materias que son de su competencia;
- e) Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea General los puntos que considere procedentes dentro del plazo previsto en el estatuto social;
- f) Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, estatuto, reglamentos y resoluciones de la Asamblea General;
- g) Investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la Asamblea General y expresar acerca de ellas las consideraciones y propuestas que correspondan; y
- h) Si el Estatuto lo prevé, asumir transitoriamente el gobierno de la sociedad, cuando por desintegración parcial o total del Consejo Directivo, éste no esté en condiciones de funcionar.

Art. 52.- Composición y elección

La Comisión Fiscal se compondrá de un número impar de miembros será elegida en la forma y por el período que establezca el estatuto.

En las cooperativas con menos de 15 socios podrá integrarse por un solo miembro.

Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Fiscal con la de miembro de cualquier otro órgano de dirección.

Art. 53.- Aplicación de otras normas.-

Rigen para la Comisión Fiscal las disposiciones sobre remoción, reglas de funcionamiento, suplencia, incompatibilidad y responsabilidad establecidas para el Consejo Directivo.

Sección VIII Comisión Electoral

Art. 54.- Comisión Electoral.-

La Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización, fiscalización y contralor de los actos eleccionarios de la Cooperativa y la proclamación de las autoridades electas. Se compondrá por un número impar de miembros electos por la Asamblea General o de acuerdo al procedimiento que establezca el Estatuto.

En las cooperativas con menos de quince socios podrá componerse por un solo miembro.

Le compete a la misma resolver los recursos que pudieran presentarse durante todo el proceso electoral, de los que entenderá subsidiariamente la Asamblea General.

Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Electoral con la de miembro de cualquier otro órgano de dirección.

Sección IX Remuneración

Art. 55.- Remuneración.-

Si el Estatuto lo prevé, la Asamblea General podrá resolver remunerar el trabajo personal realizado por los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Comisión Fiscal u otras Comisiones en el desempeño de sus cargos. Dicha remuneración podrá realizarse además del pago de los gastos en que se incurra por el mismo motivo.

CAPÍTULO V RÉGIMEN ECONÓMICO Sección I Patrimonio Social

Art. 56.- Recursos Patrimoniales.-

Los recursos propios de carácter patrimonial con los cuales pueden contar las cooperativas para el cumplimiento de su objetivo social son:

- 1) El capital social;
- 2) Los aportes no capitalizables;
- 3) Las reservas legales, estatutarias y voluntarias;
- 4) Las donaciones, legados y recursos análogos que reciban;
- 5) Los recursos que se deriven de los instrumentos de capitalización;
- 6) Las reservas provenientes de reajustes al patrimonio;
- 7) Los resultados acumulados.

Sección II
Capital Social

Art. 57.- Capital Social.-

El capital social está integrado por partes sociales, aportes obligatorios y aportes voluntarios.

Art. 58.- Partes sociales.-

Las partes sociales son nominativas, indivisibles, de igual valor y transferibles con acuerdo del Consejo Directivo.

Serán integradas en dinero o en especie o trabajo convencionalmente valuados, en la forma y plazo que establezca el estatuto.

Art. 59.- Aportes obligatorios.-

El estatuto fijará el aporte obligatorio mínimo al capital social para ser socio, que podrá ser diferente para las distintas clases de socios o para cada socio en proporción al compromiso o uso potencial que cada uno de ellos asuma de la actividad cooperativizada.

La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevos aportes obligatorios. El socio que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos, en todo o en parte, a cubrir los nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea General.

Art. 60.- Aportes voluntarios.-

La Asamblea General y, si el estatuto lo prevé, el Consejo Directivo, podrá acordar la admisión de aportes voluntarios al capital social por parte de los socios.

Los aportes voluntarios tendrán el carácter de permanencia propio del capital social, del que pasan a formar parte.

Art. 61.- Aportes amortizados.-

Cuando el Estatuto lo prevea y según la forma que él determine, los aportes integrados por los socios pueden ser adquiridos por la cooperativa con cargo a una reserva especial creada al efecto.

Art. 62.- Capital variable e ilimitado.-

El monto total del capital social será variable e ilimitado, sin perjuicio de poder establecer en el estatuto una cantidad mínima.

Art. 63.- Capital proporcional.-

El estatuto puede establecer un procedimiento para la formación e incremento del capital en proporción con el uso real o potencial de los servicios sociales, el trabajo u otra condición que presenten los socios en relación a la Cooperativa

Art. 64.- Documentación de Partes Sociales.-

El estatuto deberá establecer que las partes sociales sean representadas por certificados, constancias de aportes u otro documento nominativo.

Sección III

Aportes no capitalizables

Art. 65.- Definición de Aportes no capitalizables

Son aportes no capitalizables, aquellos que se integran con aportes específicos, dispuestos por la Asamblea General y que tienen como finalidad el fortalecimiento del patrimonio o para la constitución de fondos cuyos destinos específicos son el de financiamiento de la gestión, de proyectos de inversión y de servicios sociales. En particular se incluyen dentro de este concepto, las cuotas de admisión, sostenimiento y solidaridad.

Sección IV

Reservas legales, estatutarias y voluntarias

Art. 66.- Reservas.

Las reservas son recursos detraídos de los excedentes de gestión y que tienen como finalidad el acrecentamiento del patrimonio social. Las reservas pueden ser constituidas por disposiciones legales, estatutarias, fiscales o por voluntad de la Asamblea General. Las reservas son irrepartibles y pueden ser afectadas a absorber pérdidas.

Sección V

Legados y donaciones

Art. 67.- Legados y donaciones.-

Las cooperativas podrán recibir de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todo tipo de legados o donaciones destinados a incrementar su patrimonio. En los casos en que tales legados o donaciones, según la voluntad del donante, tengan un destino específico, compatible con el objeto social, los mismos se constituirán en un fondo afectado especial a tales fines.

Sección VI

Otros instrumentos de capitalización

Art. 68.- Instrumentos de capitalización

El estatuto podrá prever la emisión de participaciones subordinadas, acciones con interés y otros instrumentos de capitalización que puedan crearse.

Art. 69.- Participaciones subordinadas.

Son aquellos recursos provenientes de socios o de terceros, cuya remuneración esté subordinada a los resultados de la gestión de la Cooperativa. Podrán percibir intereses siempre que se obtengan excedentes de gestión y con arreglo a lo previsto en el artículo 75 de esta ley. Cuando el vencimiento de estas participaciones no tenga lugar hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa, serán consideradas parte del patrimonio.

Art. 70.- Acciones con interés.

Son aquellos recursos aportados por socios o por terceros, que formarán parte del patrimonio de la cooperativa y recibirán una remuneración fija, variable o mixta, en la forma que la cooperativa determine en cada emisión.

Las acciones deberán contener:

- 1) La expresión "acción con interés".
- 2) Denominación y domicilio de la cooperativa y los datos de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas sección Registro Nacional de Cooperativas.
- 3) Capital social.
- 4) Valor nominal.
- 5) Fecha de creación.
- 6) El nombre del tenedor.
- 7) El lugar y fecha de pago de los intereses, si no fuera el mismo que el domicilio de la Cooperativa.
- 8) El monto y la moneda.
- 9) El interés y la forma de reajuste o actualización del capital, si correspondiere.
- 10) La firma del representante legal de la cooperativa.

Art. 71.- Características comunes a los instrumentos de capitalización .

Los tenedores de estos instrumentos de capitalización no adquieren los derechos de los socios de la cooperativa ni podrán participar en las asambleas ni integrar ningún órgano social a excepción de la Comisión Fiscal, siempre que el estatuto lo prevea.

Las participaciones subordinadas, las acciones con interés u otros instrumentos de capitalización , serán nominativos y transferibles.

Las emisiones que se realicen a través de estos instrumentos no podrán en conjunto, superar el total que surge de la suma del Capital Social, más los Aportes no capitalizables, más las Reservas, más las Reservas provenientes de los reajustes patrimoniales, de la cooperativa emisora.

Las condiciones de emisión, establecerán el vencimiento, el que no podrá ser menor a cinco años, la tasa de interés a abonar, la posibilidad de rescate anticipado a su vencimiento por voluntad de la cooperativa, y toda otra condición que a juicio de la cooperativa se entienda necesario con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a este tipo de valores.

Art. 72.- Socios Colaboradores.-

Con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito, en los demás tipos de cooperativas el estatuto podrá prever la existencia de socios colaboradores que podrán tener la calidad de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sin participar en la actividad propia del objeto social de la cooperativa, pueden contribuir a su consecución.

Los socios colaboradores deberán desembolsar los aportes económicos que determine la Asamblea General, la cual fijará los criterios de ponderada participación de los mismos en los derechos y obligaciones socioeconómicas de la cooperativa, en especial el régimen de su renuncia.

Al socio colaborador no se le podrán exigir nuevos aportes al capital social, ni podrá desarrollar actividades cooperativizadas en el seno de la cooperativa.

Los aportes realizados por los socios colaboradores en ningún caso podrán exceder del 45 % (cuarenta y cinco por ciento) del total de los aportes al capital social.

Tendrán derechos políticos que en ningún caso, aún sumados entre sí los votos que le correspondieren, podrán superar el 30% (treinta por ciento) de los votos en los órganos sociales de la cooperativa.

Podrán pasar a tener la condición de socios colaboradores aquellos socios que por causa justificada no realicen la actividad que motivó su ingreso en la cooperativa y no soliciten la renuncia, y sean así declarados por el Consejo Directivo.

El régimen de responsabilidad de los socios colaboradores es el que se establece para los socios en el artículo 21 literal a) de esta Ley.

Sección VII

Reajustes patrimoniales

Art. 73.- Reajustes patrimoniales

Cuando los estatutos lo prevean o las normas legales lo dispongan, los ajustes que surjan por la reexpresión monetaria de los estados contables de acuerdo con los procedimientos admitidos contablemente, se destinarán a la reserva por reajustes patrimoniales.

Sección VIII

Resultados Acumulados

Art. 74.- Resultados Acumulados.-

Son los acrecentamientos o disminuciones patrimoniales generados por el resultado de la gestión de la cooperativa, que están pendientes de distribución o absorción respectivamente.

La distribución de los excedentes como la absorción de las pérdidas generados en cada ejercicio económico, deberán ser sometidos a consideración de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con los estados contables respectivos, a través del proyecto de distribución del resultado de gestión.

Art. 75.- Destino de los excedentes de gestión.-

La Asamblea determinará el destino del excedente, una vez deducidas las eventuales pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, conforme con las siguientes pautas:

- 1) Quince por ciento, como mínimo, para la constitución de un Fondo Reserva Legal, hasta que este iguale al capital reduciéndose al 10 % a partir de ese momento;
- 2) Cinco por ciento, como mínimo, para educación y capacitación cooperativa;
- 3) Abonar los intereses de aquellos instrumentos de capitalización que correspondan;

- 4) Las sumas que correspondan para la constitución de otras reservas especiales y el pago de interés a las partes sociales, en caso de establecerse, en cuyo caso se tomará la tasa media de colocaciones en plaza;
- 5) El resto será repartido entre los socios en concepto de retorno de acuerdo a los siguiente criterios:
 - a) En las cooperativas o secciones de consumo de bienes o servicios, en proporción al consumo hecho por cada socio;
 - b) En las cooperativas de producción o trabajo asociado, en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno;
 - c) En las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y de comercialización de productos en estado natural o elaborados, en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada socio;
 - d) En las cooperativas de segundo o ulterior grado, en proporción al capital social aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto;
 - e) En las demás cooperativas o secciones, en proporción a las operaciones realizadas o a los servicios utilizados por cada socio.

Art. 76.- Fondo de educación y capacitación cooperativa.

El Fondo de educación y capacitación cooperativa tendrá por objeto la difusión y promoción del cooperativismo, la formación de los socios y trabajadores en técnicas cooperativas, económicas y profesionales, al sostenimiento de los organismos de integración de segundo y tercer grado que cumplan funciones educativas, de asistencia técnica e investigación y complementariamente, la atención de objetivos de incidencia social, cultural o medioambiental en el área en que la cooperativa desarrolle sus actividades.

Dichas actividades podrán ser desarrolladas directamente por la cooperativa o con la participación de federaciones, confederaciones o entidades auxiliares especializadas.

Integrarán el Fondo de educación y capacitación el porcentaje de los excedentes cooperativos que se asigne al mismo, el porcentaje de los excedentes derivados de la prestación de servicios a terceros que disponga el Estatuto, el cual no podrá ser inferior al veinte por ciento y las donaciones y las ayudas recibidas de terceros con ese destino específico. Los excedentes del fondo no ejecutados en un ejercicio económico se mantendrán en la dotación del ejercicio siguiente, pudiendo conservarse en depósitos, en intermediarios financieros o en valores que eviten su desvalorización.

El informe anual de la gestión que se presente a la asamblea incluirá un detalle del uso de dicho fondo, con expresión de cantidades, conceptos y actividades. La fiscalización del Consejo Superior del Cooperativismo comprenderá el control de la correcta utilización de los recursos provenientes de dicho Fondo.

El Consejo Superior del Cooperativismo constituirá un Fondo de Fomento del Cooperativismo al que irán destinadas las partidas resultantes de los Fondos de

Educación y Capacitación de las cooperativas que se liquiden y que estará destinado a la difusión y el fomento del cooperativismo, mediante convenios con los organismos cooperativos de grado superior.

Art. 77.- Capitalización de retornos e intereses sobre partes sociales

La Asamblea podrá resolver por mayoría absoluta de presentes, la capitalización de los importes destinados a retornos e intereses sobre las partes sociales.

Sección IX

Derechos de propiedad sobre los recursos patrimoniales

Art. 78.- Derecho de reintegro

Los socios sólo tendrán derecho a reintegro a sus partes sociales, aportes obligatorios y voluntarios por su valor nominal, o si el estatuto lo prevé, en valores ajustados. El reintegro procederá siempre que el socio haya perdido su condición de tal en la cooperativa y haya saldado todas sus obligaciones con la misma. Los estatutos establecerán los criterios relativos a la forma del reintegro.

Los titulares de los aportes integrados en el Capital Especial, tendrán derecho al reintegro del mismo en las condiciones establecidas en los contratos de emisión respectivos.

Art. 79.- Irrepartibilidad de otros recursos patrimoniales

Los recursos patrimoniales de la cooperativa, a excepción de los aportes al capital social y los recursos derivados de los instrumentos de capitalización (Sección VI del presente Capítulo), constituyen patrimonio propio e irrepartible de la cooperativa. No podrán distribuirse entre los socios a ningún título ni acrecentarán sus aportes individuales.

Sección X

Recursos no patrimoniales

Art. 80.- Fuentes de financiamiento

Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por socios o terceros conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.

Sección XI

Régimen Documental y Contable

Art. 81.- Libros Sociales.-

Deberán llevar en orden y al día, los siguientes libros:

- 1) Libro de registro de socios.
- 2) Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y del Comité de Recursos en su caso.

Los referidos libros podrán ser presentados en soportes informáticos u otros medios admitidos por la reglamentación.

Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del Consejo Directivo.

Art. 82.- Ejercicio económico, contabilidad, memoria y estados contables.-

El ejercicio económico será anual, salvo en los casos de constitución, extinción o fusión de la cooperativa.

La contabilidad será llevada con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

A la fecha de cierre del ejercicio, en un plazo máximo de ciento ochenta días, el Consejo Directivo presentará los estados contables, la memoria sobre la gestión realizada y la evolución del número de socios en el período y el proyecto de distribución de los excedentes de gestión o de absorción de, pérdidas, a la Asamblea General con informe de la Comisión Fiscal, y del auditor si correspondiere.

Art. 83.- Auditoria

Las cooperativas pueden contar con un servicio permanente de auditoria externa con intervención de profesional matriculado. Y, en su caso, de conformidad con lo establecido en esta ley, su reglamentación o las normas jurídicas que regulan el sistema de auditorias obligatorias prescriptas para la rama de actividad que desarrollen las cooperativas.

El servicio de auditoria podrá ser prestado por otra cooperativa o entidad con intervención de profesional matriculado.

Será obligatoria dicha auditoria en aquellos casos en que esta ley u otras normas jurídicas así lo prescriban.

Art. 84.- Prestación de servicios a no socios.-

La prestación de servicios a no socios no podrá en ningún caso exceder de la tercera parte de las operaciones que realice anualmente la cooperativa.

Asimismo, no podrá realizarse en condiciones más favorables que a los socios.

Los excedentes de gestión que proporcionalmente deriven de ellas, serán destinados a un fondo con destino afectado para educación cooperativa o servicios sociales conforme prevea el estatuto o decida la Asamblea.

No se considerarán operaciones realizadas con terceros las que se efectúen con los siguientes fines:

- a) Para servir a socios de otra cooperativa;
- b) Para liquidar artículos sobre los que se deje de operar o que podrían desmerecerse con una conservación prolongada;
- c) Para servir al público, por motivo de general utilidad, a requerimiento de organismos del Estado;
- d) En el caso de las cooperativas de segundo o ulterior grado aquellas operaciones que se realicen con los socios de sus entidades socias.
- e) Las operaciones que se realicen entre cooperativas.

CAPÍTULO VI **CONSEJO SUPERIOR DEL COOPERATIVISMO**

Sección I **Del Consejo Superior del Cooperativismo**

Art. 85.- Órgano.-

Créase en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Consejo Superior del Cooperativismo que actuará como órgano desconcentrado del referido organismo, el cual le proveerá los recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento. Prestarán servicio en ella funcionarios de dicho organismo o de otros órganos u organismos públicos en régimen de comisión.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente el Consejo Directivo del Consejo Superior del Cooperativismo podrá, por unanimidad, contratar, a término, personal técnico para tareas específicamente determinadas.

La autoridad de aplicación y control de la legislación cooperativa será el Consejo Superior del Cooperativismo.

Dicho organismo ejercerá la política administrativa de las cooperativas y tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, estatutarias y la auditoría contable de las mismas.

Art. 86.- Funciones.-

Son funciones del Consejo Superior del Cooperativismo, sin perjuicio de las demás que le otorgue esta ley:

- 1) Promover y fomentar el desarrollo de las cooperativas y del sector cooperativo en general, y brindar asistencia técnica a las cooperativas coordinando su actividad con las cooperativas de grado superior;
- 2) Velar por el cumplimiento de los principios cooperativos;
- 3) Asesorar en la fijación de la política nacional en materia de cooperativas, y colaborar en su implementación, coordinando con otros organismos oficiales competentes su ejecución;
- 4) Informar a las autoridades competentes los proyectos de ley y otras normas que incidan sobre las cooperativas;
- 5) Evacuar consultas que le formulen las cooperativas;
- 6) Organizar un servicio estadístico y de información sobre cooperativas, pudiendo requerir información periódica y sistemática de las mismas, directamente o a través de los organismos de integración con que el Consejo establezca convenios;
- 7) Ejercer la supervisión del cumplimiento de las leyes y demás normas aplicables a las cooperativas y especialmente fiscalización pública de las cooperativas, su funcionamiento social y contable, por los medios que señale la reglamentación;
- 8) Impartir a las entidades de revisión o supervisores auxiliares y comisiones fiscales normas sobre el desarrollo de sus funciones y contenido de los dictámenes e informes que deban emitir;
- 9) Imponer sanciones a las cooperativas de conformidad con las disposiciones de esta ley;
- 10) Dictar, dentro del marco de su competencia, las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones;
- 11) Elaborar el proyecto de reglamentación de la presente ley;

- 12) Cumplir las funciones de conciliación y arbitraje en los términos que establece la presente ley.

Art. 87.- Dirección.-

El Consejo Superior del Cooperativismo estará integrado por dos representantes del Estado, uno de los cuales lo presidirá, y dos representantes del sector cooperativo. Los representantes del Estado serán designados por el Presidente de la República y los del sector cooperativo, con los correspondientes suplentes, serán designados por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). El Presidente del Consejo tendrá doble voto en caso de empate.

Art. 88.- Fiscalización pública.-

La Fiscalización pública a cargo del Consejo Superior del Cooperativismo se ejercerá sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos oficiales respecto de las actividades específicas de las distintas clases de cooperativas.

Art. 89.- Atribuciones.-

Son atribuciones del Consejo Superior del Cooperativismo, sin perjuicio de otras que esta ley y la reglamentación reconozca, las siguientes:

- 1) Requerir documentación y realizar investigaciones e inspecciones en las cooperativas.
- 2) Asistir a las Asambleas.
- 3) Observar a las cooperativas por infracciones a la legislación, sus reglamentos, estatutos, instrucciones del Consejo Superior del Cooperativismo y demás normas aplicables, ordenándoles su corrección, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pertinentes;
- 4) Solicitar al juez competente la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o los reglamentos;
- 5) Solicitar al juez competente la intervención de la cooperativa cuando existieran motivos que importen riesgo grave para su existencia;
- 6) Solicitar al juez competente la disolución y liquidación de la cooperativa cuando cometiera infracciones cuya gravedad aconseje la cesación de su existencia.
- 7) Coordinar su labor con otros organismos competentes por razón de las actividades de las cooperativas.
- 8) Impedir el uso indebido de la palabra "cooperativa" conforme con esta ley.
- 9) Seleccionar y designar las personas que cumplirán las funciones de mediadores y árbitros, y reglamentar los procedimientos de conciliación y arbitraje.
- 10) En general, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, cuidando de no entorpecer la regular administración de las cooperativas.

Las funciones de fiscalización podrán ejercerse mediante convenios con la Auditoría Interna de la Nación, Instituto Nacional de Estadísticas, con las cooperativas de grado superior, o con organismos representativos o auxiliares especializados del movimiento cooperativo.

El Consejo Superior del Cooperativismo podrá determinar las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir,

con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y podrá suspender o cesar en cualquier momento a las entidades que no cumplan las funciones y requisitos establecidos.

El Poder Ejecutivo determinará el arancel que las entidades de revisión podrán cobrar por sus informes y actuaciones, así como los valores que el Consejo podrá cobrar a los interesados por sus propias actuaciones, debiendo prever especialmente costos accesibles de acuerdo con la dimensión económica de las cooperativas.

Los funcionarios del Consejo Superior de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado. Ello no obstará a la difusión de información de carácter general, que por su naturaleza no sea reservada, para la confección de datos estadísticos, estudios o investigaciones, así como la transmisión de información pertinente con el fin de velar por la fe pública o el interés de los socios.

Art. 90.- Sanciones.-

En caso de infracción a esta ley y a las demás disposiciones vigentes en la materia, el Consejo Superior del Cooperativismo podrá imponer a las cooperativas, las siguientes sanciones:

- 1) Llamado de atención;
- 2) Apercibimiento;
- 3) Multa equivalente al importe de hasta 1000 unidades reajustables.

Las sanciones se aplicarán previa instrucción de sumario en el que se asegurará el derecho de defensa y se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la cooperativa, su importancia social y económica y en su caso, los perjuicios causados.

Art. 91.- Recursos.-

Contra las resoluciones del Consejo Superior del Cooperativismo, podrán interponerse los recursos de carácter administrativo y las acciones jurisdiccionales que correspondan.

Sección II Conciliación y Arbitraje e Intervención Judicial

Art. 92.- Conciliación y Arbitraje

Las cuestiones que son objeto de la presente ley y las demás normas de derecho cooperativo, que originen controversias o conflictos entre cooperativas, entre algún socio y la cooperativa a la que pertenece, entre socios de alguna cooperativa o entre una cooperativa y la entidad de grado superior a la que se agrupa, pueden ser objeto de conciliación ante el Consejo Superior del Cooperativismo, o bien directamente presentadas ante la jurisdicción ordinaria. El procedimiento de conciliación deberá estar establecido por el Estatuto, o, en su defecto, se aplicará el procedimiento general que haya aprobado el Consejo. Asimismo, el Estatuto también podrá determinar los supuestos en que sea obligatorio el intento de conciliación como requisito previo al procedimiento judicial.

Las cuestiones a que se refiere el inciso anterior pueden ser sometidas, si lo solicitan las partes o lo disponen los estatutos sociales, al arbitraje de las personas que designe el Consejo Superior del Cooperativismo, de acuerdo a la nómina de árbitros que el mismo haya aprobado. El procedimiento de formalización y tramitación de estos arbitrajes será establecido por reglamento aprobado por dicho Consejo. La competencia en materia de arbitraje del Consejo Superior del Cooperativismo no excluye la facultad de las partes de someter sus diferencias a otras formas de arbitraje, si el estatuto no prescribe lo contrario, de acuerdo con lo que dispone la legislación aplicable.

La presentación de la solicitud de conciliación o arbitraje interrumpe la prescripción y el cómputo de los plazos para el ejercicio de las acciones correspondientes.

Art. 93.- Intervención Judicial

La intervención judicial de una cooperativa no podrá durar más de seis meses, que el juez competente, en forma fundada, podrá prorrogar por una sola vez por hasta el mismo período. Dentro de ese lapso el interventor o la interventora convocará la asamblea para informar de la situación y de las medidas a tomar para normalizar el funcionamiento de la cooperativa.

La remuneración del interventor o interventora será fijada teniendo en cuenta la capacidad económica de la cooperativa.

Si concluido el plazo de la intervención persisten las causas que la originaron, el juez decretará la disolución de la cooperativa.

CAPÍTULO VII ASOCIACIÓN, FUSIÓN, INCORPORACIÓN

Art. 94.- Asociación de cooperativas entre sí y con otras personas públicas o privadas.-

Las cooperativas podrán asociarse entre sí para intercambiar servicios, celebrar contratos de participación, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada el objeto social, y en fin para llevar a la práctica el principio de integración cooperativa.

Asimismo las cooperativas podrán asociarse con personas de otra naturaleza jurídica así como tener en ellas participación, constituir sociedades, asociaciones, grupos de interés económico y consorcios, de cualquier clase, entre sí o con otras personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, siempre que ello no altere su objeto social ni transfiera beneficios fiscales ni legales o viole las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y el estatuto.

Art. 95.- Federaciones y Confederaciones.-

Para la defensa y promoción de sus intereses en cuanto cooperativas, éstas podrán asociarse libre y voluntariamente en federaciones y confederaciones de cooperativas, sin perjuicio de poder promover cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con la legislación general reguladora del derecho de asociación.

Corresponde a las federaciones y confederaciones de cooperativas:

- a) Representar a los miembros que se asocien de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos;

- b) Procurar la conciliación de los conflictos surgidos entre sus entidades asociadas, cuando estas lo soliciten;
- c) Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios;
- d) Fomentar la promoción, formación y educación cooperativa;
- e) Colaborar con el Consejo Superior del Cooperativismo y con el Registro de Personas Jurídicas sección Registro Nacional de Cooperativas y todo otro organismo competente en la materia;
- f) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.

Art. 96.- Fusión.-

Dos o más cooperativas podrán fusionarse a los efectos de alcanzar con mayor eficacia sus objetivos sociales. Las cooperativas fusionadas se disuelven sin liquidar su patrimonio pero se extingue la personería jurídica. La nueva cooperativa emergente de la fusión, subroga de pleno derecho a las que le dieron origen en todos sus derechos, acciones y obligaciones.

Art. 97.- Incorporación.-

Habrá incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra u otras cooperativas o entidades jurídicas, conservando la incorporante su personería jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. Aquella igualmente subroga en los derechos, acciones y obligaciones a las incorporadas.

Art. 98.-Trámites.-

Para la fusión o incorporación, las interesadas elaborarán un plan de operaciones que una vez aprobado por el Consejo Superior del Cooperativismo o por el organismo público competente por la naturaleza de la actividad que realice la cooperativa, será sometido a las Asambleas extraordinarias de las afectadas. Aprobada la fusión o incorporación, se solicitará la inscripción respectiva en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Art. 99.- Cooperativas de grado superior.-

Por resolución de sus respectivas Asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de segundo o ulterior grado o asociarse a ellas. Estas se regirán por las disposiciones de la presente ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza. Deben contar con un mínimo de dos socios.

En las cooperativas de segundo o ulterior grado también podrán integrarse en calidad de socios personas jurídicas de otra naturaleza, públicas o privadas, y personas físicas, hasta un máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) del total del capital social de la cooperativa.

Art. 100.- Actividad.-

Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán realizar, conforme con las disposiciones de esta ley y de sus respectivos estatutos, actividades de carácter técnico, económico, social, cultural y asumir la representación de sus miembros.

Art. 101.- Representación y voto.-

Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional al número de socios, al capital aportado, uso de los servicios u otros criterios que establezca el estatuto.

El estatuto debe fijar un mínimo que asegure la participación de todos los socios y un máximo que evite el predominio excluyente de alguno de ellos.

CAPÍTULO VIII

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN ECONÓMICA

Art. 102.- Corporaciones cooperativas.-

Se denominarán corporaciones cooperativas aquellas agrupaciones empresariales que, constituidas mayoritariamente por cooperativas de primer y segundo o ulterior grado, tengan por objeto la definición de políticas empresariales, su control, y, en su caso, la planificación estratégica de la actividad de sus socios, así como la gestión de los recursos y actividades comunes.

El estatuto de la corporación cooperativa distribuirá las facultades de administración de la misma entre un órgano de contralor y un órgano de dirección, unipersonal o colegiado, sin que nadie pueda pertenecer simultáneamente a ambos órganos.

El órgano de contralor fiscalizará la gestión, que es asumida por el órgano de dirección, y tendrá las facultades referidas a la admisión y renuncia o exclusión de socios y a la aplicación del régimen disciplinario; asimismo corresponde a dicho órgano de contralor autorizar los actos de administración extraordinaria determinados según los criterios básicos estatutarios.

El órgano de dirección asumirá las funciones gestoras y directivas de la corporación cooperativa y la representación de ésta ante terceros. Sus miembros serán designados y revocados por el órgano de control.

En lo no regulado expresamente por este artículo se aplicará lo dispuesto para las cooperativas de segundo o ulterior grado.

Art. 103.- Cooperativas mixtas.-

Son cooperativas mixtas aquellas en las que existen socios minoritarios cuyo derecho de voto en la Asamblea General se podrá determinar, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado, que estará representado por medio de certificados, constancia de aportes u otros documentos o títulos.

En estas cooperativas el derecho de voto en la Asamblea General respetará la siguiente distribución:

- a) Al menos el cincuenta y uno por ciento de los votos se atribuirá, en la proporción que defina el estatuto, a socios cooperativistas;
- b) Una cuota máxima, a determinar estatutariamente, del cuarenta y nueve por ciento de los votos se distribuirá en acciones con voto que, si el estatuto lo prevé, podrán ser libremente negociables en el mercado.

En el caso de las acciones con voto, tanto los derechos y obligaciones de sus titulares como el régimen de los aportes se regularán por el estatuto y por lo dispuesto en la legislación de sociedades anónimas para las acciones.

Las participaciones de cada uno de los dos grupos de socios en los resultados anuales a distribuir sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los dos colectivos tenga según lo previsto en el inciso segundo de este artículo.

Los resultados imputables a los poseedores de acciones con voto se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado. Los resultados imputables a los restantes socios se distribuirán entre éstos según los criterios generales definidos en esta ley para las cooperativas de primer grado.

La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno de los dos colectivos de socios requerirá el consentimiento mayoritario del grupo correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en la Asamblea General o en Junta especial y parcial.

En el momento de la constitución de estas cooperativas, previo a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas, el Consejo Superior del Cooperativismo podrá autorizar la previsión estatutaria de repartibilidad en caso de liquidación, de la cuota parte del Fondo de Reserva Obligatorio correspondiente a los titulares de las acciones con votos, con arreglo a los criterios señalados en el inciso cuarto y respetando las demás normas de adjudicación del haber social establecidas en el artículo 110.

No podrán adoptar la forma de cooperativa mixta regulada en este artículo las cooperativas de vivienda ni las de ahorro y crédito.

Art. 104.- Secciones.-

El estatuto de la cooperativa podrá prever y regular la constitución y funcionamiento de secciones, que desarrollen, dentro del objeto social, actividades económico-sociales específicas con autonomía de gestión, patrimonio separado y cuentas de explotación diferenciadas, sin perjuicio de la contabilidad general de la cooperativa. La representación y gestión de la sección corresponderá, en todo caso, al Consejo Directivo de la Cooperativa.

Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad de la sección responden, en primer lugar, los aportes hechos o prometidos y las garantías presentadas por los socios integrados en la sección, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa.

Salvo disposición estatutaria en contrario, la distribución de excedentes será diferenciada.

La Asamblea General de la cooperativa podrá acordar la suspensión de las resoluciones de la Asamblea de socios de una sección, que considere contrarios a la ley, al estatuto o al interés general de la cooperativa.

El volumen de operaciones de una Sección, en ningún caso, podrá superar el 20% del volumen total de operaciones de la Cooperativa. Y en forma conjunta las secciones no podrán superar el 50% del volumen total de operaciones de la Cooperativa.

Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a contar con un servicio de auditoría externa en la forma en que lo prevé el artículo 83 de la presente ley, la que estará obligada a expedirse expresamente en cada año en cuanto a si se cumplen o no las prescripciones del inciso anterior.

Para el caso en que se superasen los porcentajes precedentemente establecidos, la cooperativa dentro del año siguiente a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado, deberá optar entre reducir el volumen de las operaciones o las secciones cuyas operaciones, individual o conjuntamente, excedan los límites deberán escindirse de la Cooperativa. Si vencido el plazo de un año antes referido se comprobare que no se ha subsanado el desvío por ninguna de las opciones antedichas, constituirá, de pleno derecho y

automáticamente, causal de disolución de la Cooperativa, pudiendo dicha circunstancia ser judicialmente declarada a solicitud de cualquier persona titular de un interés legítimo.

Art. 105. - Normas aplicables a las Secciones

A las secciones relacionadas en el artículo anterior le serán aplicables todas las normas legales y reglamentarias, correspondientes al tipo de cooperativa o actividad que desarrolle cada Sección.

Asimismo, no se podrán transferir a las Secciones beneficios fiscales ni legales que provengan del tipo de actividad u objeto principal de la Cooperativa.

CAPITULO IX

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Art. 106. - Causas de disolución.-

Las cooperativas se disolverán por:

- 1) Decisión de la Asamblea General por la mayoría de dos tercios (2/3) de votos presentes;
- 2) Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año;
- 3) Fusión o incorporación;
- 4) Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto;
- 5) Declaración de quiebra;
- 6) Sentencia judicial firme;
- 7) Finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el que fue creada;
- 8) Por otras causales previstas en las disposiciones legales aplicables en razón de la actividad de la cooperativa.

Art. 107. - Efectos de la disolución.-

Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión o incorporación. La cooperativa conservará su personalidad jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben comunicar la disolución al Consejo Superior del Cooperativismo y al Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas, para su inscripción.

Art. 108. - Órgano liquidador.-

La liquidación en principio estará a cargo del Consejo Directivo, salvo disposición en contrario del estatuto o impedimento o imposibilidad para ejercer el cargo, caso en el cual la designación de la Comisión liquidadora corresponderá hacerla a la Asamblea General o al Consejo Superior del Cooperativismo. La Comisión Fiscal controlará el proceso de liquidación.

Art. 109. - Facultades.-

El órgano liquidador ejerce la representación de la cooperativa. Debe realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento "en liquidación".

Art. 110.- Distribución del Remanente.-

El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor de los aportes según las disposiciones de la presente ley, se entregará a la entidad sin fines de lucro que fije el Estatuto Social.

**TITULO II
DE LAS COOPERATIVAS EN PARTICULAR**

CAPITULO I

CLASES DE COOPERATIVAS

Normas comunes

Art. 111.- Clasificación y normativa aplicable.-

Las cooperativas pueden constituirse acogíendose a cualquiera de las clases reguladas en el presente título. Esa clasificación no obstará a la constitución de otras cooperativas, con tal de que quede determinada la actividad que desarrollarán y los derechos y obligaciones de los socios, en cuyo caso se aplicará la normativa prevista para la clase de entidades con las que aquéllas guarden mayor analogía.

Cada cooperativa, además de ajustarse a los principios consagrados en la presente ley, se regirá por las disposiciones especiales aplicables a la clase respectiva, y en lo no previsto en la Sección correspondiente, por las normas de la Parte General.

**CAPITULO II
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN O TRABAJO ASOCIADO**

Artículo 112.- Objeto.-

Son cooperativas de producción o trabajo asociado, las que tienen por objeto proporcionar a sus asociados puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la actividad económica.

Se consideran incluidas en la definición precedente, aquellas cooperativas que sólo tengan por objeto la comercialización en común de productos o servicios, siempre que sus asociados no tengan trabajadores dependientes y el uso de medios de producción de propiedad del asociado, esté afectado expresamente al cumplimiento del objeto de la cooperativa.

Artículo 113.- Trabajadores socios y no socios.-

Las cooperativas de producción o trabajo asociado se integrarán con un mínimo de seis trabajadores socios.

El número de trabajadores no socios no podrá superar el % (veinte por ciento) de los miembros de la cooperativa. En cualquier caso, el mínimo de empleados podrá ser de dos y estas limitaciones no rigen para los trabajadores zafrales ni para los contratados a plazo por un período máximo de un año, no renovable.

Artículo 114.- Remuneración de los trabajadores socios.-

La remuneración de los trabajadores socios se relaciona con su doble condición. Percibirán como remuneración mensual la equivalente al salario de la rama de actividad económica donde gira la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan.

Asimismo percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la cantidad y calidad del trabajo aportado por cada uno durante el ejercicio económico, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto, de acuerdo a lo establecido en el precedente inciso.

Artículo 115.- Legislación laboral y previsional.-

Serán aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios cooperarios excluidos.

Las cooperativas de producción o trabajo asociado, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social.

Facultase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de aportación, como único aporte a Seguridad Social, a aquellas cooperativas de producción o trabajo, cuyo volumen de actividad se encuadre en las condiciones que al respecto fije la reglamentación.

Efectuarán exclusivamente los aportes jubilatorios obreros a los organismos de previsión social y los que correspondan al subsidio por enfermedad, teniendo en cuenta su naturaleza de asociación de trabajadores.

Artículo 116.- Fomento y tributación.-

Las cooperativas de producción o trabajo asociado estarán exoneradas de todo tributo nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Específico Interno (IMESI) y el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS).

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen de excepciones tributarias destinado a fomentar el desarrollo de estas entidades cooperativas, en las condiciones que establezca la reglamentación.

En tal sentido, el Poder Ejecutivo podrá exonerar a estas cooperativas de los tributos que gravan las importaciones de bienes de capital, repuestos y materias primas destinadas al uso o manufacturación por parte de la cooperativa.

Artículo 117.- Promoción.-

En los casos de , judicial o concurso civil liquidación de empresas privadas que liquiden o incurran en cesación de pagos o que deban ser intervenidas, se otorgará una adjudicación prioritaria a las cooperativas de trabajo que se constituyan con la totalidad o parte del personal, del patrimonio y de los derechos de gestión.

En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en su totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización.

CAPITULO III COOPERATIVAS DE CONSUMO

Artículo 118.-Objeto

Son Cooperativas de Consumo aquellas que tienen como finalidad satisfacer las necesidades de consumo de bienes y servicios de sus socios, pudiendo realizar para ello todo tipo de actos y contratos.-finalidad

Sección II.- De los Socios.-

Artículo 119.- En lasLos socios de las cooperativas de consumo, adquieren por igual los derechos y obligaciones para con la cooperativa y su número será ilimitado. Tienen derecho a un voto por socio con independencia del capital que haya integrado y su responsabilidad queda limitada al monto de su aporte.

Lo la responsabilidad de cada socio queda limitada al monto de su aporte, no pudiendo ser de os estatutos establecerán la forma del reintegro del mismo.

Artículo 1205.- Prestación de servicios a no socios.-

Los estatutos podrán prever que otras personas físicas o jurídicas no socias puedan acceder a los bienes y servicios que presten las cooperativas de consumo, siempre que dichas operaciones no superen las realizadas con los socios en cada ejercicio anual.

CAPITULO IV COOPERATIVAS AGRARIAS

Artículo 121.- Objeto.-

Son cooperativas agrarias las que tienen por objeto efectuar o facilitar todas o algunas de las operaciones concernientes a la producción, transformación, conservación, clasificación, elaboración, comercialización, importación o exportación de productos provenientes de la actividad agraria en sus diversas formas, realizada en común o individualmente por sus miembros.

Artículo 122.- Actividad.-

A los efectos de lo establecido en el artículo anterior podrán:

A) Realizar la adquisición, importación y empleo de máquinas, instrumentos y demás insumos necesarios para la explotación agraria.

B) Realizar todos los actos de administración y disposición necesarios para cumplir con sus fines específicos así como las necesidades sociales y económicas de sus integrantes.

En la facultad establecida en el párrafo anterior queda comprendida de modo expreso la adquisición y arrendamiento de tierras y edificios para aprovechamiento en común y fraccionamiento de tierras para vender a sus miembros.

C) Gestionar y administrar, en favor de sus miembros, créditos de organismos nacionales, extranjeros e internacionales.

Artículo 123.- Socios.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, para ser socio de una cooperativa agraria se debe realizar la actividad agraria que requieran los estatutos.

Podrán ser socios de las cooperativas agrarias las sociedades civiles con contrato escrito, que realicen la actividad agraria que requieran los estatutos y las Sociedades de Fomento Rural (Ley 14.330, de 19 de diciembre de 1974).

Artículo 124.- Asociación y Fusión.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo VII sobre asociación, fusión e incorporación, las cooperativas agrarias podrán asociarse o fusionarse con las sociedades a que hace referencia la ley 14.330 de 19 de diciembre de 1974.

Artículo 125.- Actividad en Competencia.-

Los estatutos podrán prohibir que sus socios operen en la misma actividad económica de la cooperativa, fuera de lo que constituye la actividad agraria específica requerida para ser socio.

Artículo 126.- Título Ejecutivo.-

Los saldos deudores de los socios con la Cooperativa y de ésta respecto a aquellos se conformarán de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos. Cumplido dicho procedimiento, constituirán título ejecutivo.

Artículo 127. Envío de Producción a la Cooperativa

Los Estatutos podrán prever la facultad de la Asamblea General de establecer la obligación por parte de los socios, del envío total o parcial de su producción a la Cooperativa.

Cuando ello así se estipule, la falta de cumplimiento de la citada obligación por parte del socio dará lugar a la sanción que establezca el Estatuto.

Artículo 128. Beneficios.-

Las cooperativas Agrarias gozarán de los siguientes beneficios:

A) De un tratamiento preferencial por parte de los organismos oficiales de créditos en la tasa de interés y demás condiciones de los préstamos otorgados para el cumplimiento de su objeto.

B) Estarán exentas, en un 50% (cincuenta por ciento) de todo gravamen, contribución, impuestos nacionales directos o indirectos de cualquier naturaleza, con excepción del Impuesto al valor Agregado e Impuesto Específico Interno.

C) El Estado, por intermedio de sus organismos, deberá facilitar los medios y conceder todos los beneficios posibles para la exportación directa de los productos por las Cooperativas. El Poder Ejecutivo podrá exonerar a éstas de todo tributo a la exportación creado o por crearse.

D) Podrán hacer uso de la asistencia crediticia establecida en el artículo 6° de la ley 14.178, de 28 de marzo de 1974, sin las limitaciones porcentuales allí indicadas, en la forma que determine la reglamentación.

E) Serán gratuitas todas las gestiones de constitución o inscripciones previstas en esta ley.

Artículo 129. Responsabilidad.-

En las cooperativas agrarias la responsabilidad podrá ser limitada o suplementada según lo dispuesto por el artículo 21 de la presente ley, pero no regirá el límite previsto en el literal b) de dicho artículo, no obstante siempre deberá

consignarse en el estatuto el monto suplementario por el que responderán los socios.

Artículo 130. Intransferibilidad de la calidad de socio.-

En las cooperativas agrarias las partes sociales son intransferibles.

Artículo 131.- Estatutos.-

Los estatutos podrán contener la obligación de no retirarse antes de la expiración de un plazo, que no podrá exceder nunca de cinco años contados desde su ingreso.

Artículo 132.- Fomento.-

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fomentará la creación de Cooperativas Agrarias y dispondrá la realización de una intensa propaganda a ese fin. Asimismo, desarrollará programas de capacitación cooperativa en los diferentes niveles que corresponda.

CAPITULO V COOPERATIVAS DE VIVIENDAS

Sección I Disposiciones Generales

Artículo 133.- Objeto.-

Las cooperativas de viviendas son aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda.

Artículo 134.- Legislación Aplicable.-

Las cooperativas de vivienda se regularán por las disposiciones de la presente ley y por la ley 13.728 de 17 de diciembre de 1968 y sus leyes modificativas en lo pertinente.

Artículo 135.- Principios.-

Las cooperativas de vivienda, además de los principios consagrados en el artículo 7 de la presente ley, deberán observar los siguientes:

1) Suministrarán viviendas al costo, no admitiéndose ningún tipo de práctica especulativa.

2) Consagrarán que los excedentes no serán capitalizables en las partes sociales de los socios, ni podrán ser objeto de reparto entre los mismos.

Artículo 136.- Contenido del Estatuto.-

Además de lo dispuesto en el artículo 16, los estatutos deben establecer:

- A) Las condiciones y el plazo para el reembolso de las partes sociales.
- B) Los criterios de adjudicación de las viviendas.
- C) El procedimiento fehaciente de convocatoria de los socios para las Asambleas, estableciendo un plazo no inferior a diez días corridos y el funcionamiento de las mismas.
- D) Las formalidades y oportunidades de los actos eleccionarios.

- E) El número de integrantes de los órganos directivos y de fiscalización, su carácter honorario, sus cometidos y forma de funcionamiento.
- F) Las mayorías necesarias de los órganos sociales para sesionar y resolver.
- G) Que se requerirá como mínimo una mayoría de dos tercios de presentes para la modificación del estatuto y para la aprobación o reforma de los reglamentos internos.
- H) Las elecciones de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal, se efectuarán en votación secreta y obligatoria y si se hiciese por listas, deberá aplicarse el principio de representación proporcional.

Permítase, la representación del socio en cargos de la cooperativa, de carácter electivo, por integrantes del núcleo habitacional del socio titular y que el delegado sea votado por la masa social en la forma que dispone el presente artículo.

Artículo 137.- Retenciones.-

Las cooperativas inscriptas en el Registro, que a tal efecto lleve el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tendrán derecho de hacer retener de los sueldos, jornales, remuneraciones o pasividades de los socios, hasta el 20% (veinte por ciento) de los conceptos referidos, si la liquidación que realizase la cooperativa fuera conformada por la Dirección Nacional de Vivienda.

La liquidación practicada de conformidad con lo dispuesto por este artículo, tendrá carácter de título ejecutivo y su ejecución se tramitará de acuerdo a lo previsto por los artículos 353 numeral 6 y 354 del Código General del Proceso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las infracciones en que incurran las empresas privadas en relación a su obligación de retención, serán sancionadas con una multa de entre cinco y diez veces el monto correspondiente a la retención que estaba obligada a realizar. Esta multa será aplicada por la Dirección Nacional de Vivienda y su producido se verterá al Fondo Nacional de Vivienda.

Artículo 138.- Aspectos patrimoniales.-

Las partes sociales no podrán ser inferiores a dos Unidades Reajustables y se reajustarán según dicha medida de valor.

Los Estatutos o Reglamentos que se aprueben, pueden determinar la inclusión o no de los intereses del préstamo hipotecario en la parte social del cooperativista, no pudiendo excluirse, en ningún caso, lo correspondiente a la amortización del capital como aporte del socio

Forman parte del patrimonio social las sumas que perciba la cooperativa de parte de los socios como compensación por cuota de administración, cuota de mantenimiento de las viviendas y servicios comunes. Dichos rubros no integran las partes sociales del cooperativista, y por tanto no serán objeto de restitución al egreso ni de reparto entre los socios.

Artículo 139.- Trabajo de los socios.-

Las cooperativas de vivienda podrán utilizar el trabajo de sus socios en la construcción de las viviendas, bajo sus dos modalidades, de autoconstrucción y ayuda mutua.

La autoconstrucción es el trabajo puesto por el futuro propietario o usuario y sus familiares, en la construcción.

La ayuda mutua es el trabajo comunitario, adoptado por los socios para la construcción de los conjuntos colectivos y bajo la dirección técnica de la cooperativa.

Tanto la autoconstrucción como la ayuda mutua deberán ser evaluadas para integrar la respectiva parte social y no darán lugar a aporte alguno a los organismos de previsión y seguridad social.

Artículo 140.- Comisión de Fomento y Educación.-

En todos los casos, las cooperativas de vivienda, además de los órganos enumerados en el artículo 29 de la presente ley, deberán tener un Comisión de Fomento y Educación, que se encargará de todo lo referente a educación, integración y fomento de los socios y terceros.

Artículo.- 141.- Disolución.-

Para las cooperativas de vivienda las causales de los numerales 1) y 3) del artículo 106 deberán resolverse en una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y por una mayoría de dos tercios de socios habilitados.

En el caso no se aplicará el derecho de receso.

Artículo 142.- Clasificación.-

Las Cooperativas de Vivienda se clasificarán en "Unidades Cooperativas de Vivienda" y "Cooperativas Matrices de Vivienda".

Artículo 143.- Integración.-

Las unidades cooperativas de vivienda y las cooperativas matrices podrán integrarse a organismos cooperativos nacionales e internacionales en acción solidaria.

SECCION II

De las Unidades Cooperativas de Vivienda

Artículo 144.- Definición.-

Son unidades cooperativas de vivienda las que constituidas por un mínimo de diez socios y un máximo de doscientos, tienen por finalidad proporcionar vivienda y servicios complementarios a los mismos, construyendo con ese objeto un inmueble o un conjunto habitacional o adquiriéndolo en los casos previstos en el artículo 145.

Para el caso en que el objeto de la cooperativa se alcanzara a través de la realización de obras de mejoramiento, complementación y subdivisión en varias unidades de una vivienda existente ("reciclaje") el número mínimo de socios se fija en seis.

Artículo 145.- Clasificación.-

Las unidades cooperativas de vivienda pueden ser de usuarios o de propietarios.

Artículo 146. Unidades Cooperativas de Usuarios.-

Las unidades cooperativas de usuarios sólo atribuyen a los socios cooperadores, el derecho de uso y goce sobre las viviendas sin limitación de tiempo. Dicho derecho se transmitirá a los herederos y aun podrá cederse por acto entre vivos, pero exclusivamente en los casos en que lo permite la presente ley.

Artículo 147.- Unidades Cooperativas de Propietarios.-

Las unidades cooperativas de propietarios atribuyen la propiedad exclusiva e individual de la propiedad horizontal (ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946), sobre las respectivas viviendas, pero con facultades de disponibilidad y uso limitadas, según lo que prescriben los artículos 160 y 161.

Las cooperativas de propietarios pueden retener la propiedad de las viviendas, otorgando el uso a los futuros propietarios, mientras éstos amortizan el costo de la vivienda.

Artículo 148.- Adquisición de Inmuebles.-

Sólo podrán adquirir inmuebles o conjuntos habitacionales ya construidos las unidades cooperativas de usuarios y exclusivamente en los siguientes casos:

A) Cuando se trate de un inmueble o conjunto habitacional construido por uno de los organismos de derecho público a que hace referencia el artículo 112 de la Ley 13.728, siempre que el proyecto de estatuto sea sometido a la aprobación del mismo;

B) Cuando se trate de una cooperativa formada por inquilinos de un inmueble construido según permiso aprobado con anterioridad a la vigencia de la Ley 13.728, con la finalidad de adquirir dicho inmueble según el régimen establecido por el artículo 141.

Artículo 149.- Reducción de Organos

Las unidades cooperativas de vivienda cuyo número de socios sea inferior a veinte podrán reducir sus órganos al Consejo Directivo y la Asamblea General. En ese caso las funciones establecidas para la Comisión Fiscal y Comisión Fomento, serán desempeñadas por la Asamblea General. Si el Estatuto no estableciese la solución indicada, podrá adoptarse la misma por resolución de la Asamblea General por una mayoría de dos tercios de presentes.

Artículo 150.- Registro.-

Obtenida la personalidad jurídica, las cooperativas de vivienda deberán inscribirse en el registro que llevará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el mismo Registro se inscribirán también los institutos de asistencia técnica.

Artículo 151.- Licitaciones y Programa habitacional.-

Las cooperativas de vivienda podrán participar en todas las licitaciones y llamados a presentación de propuestas que realice el sistema público de vivienda, conjuntamente con los institutos de asistencia técnica a que refiere la Sección 6 de este Capítulo, siendo requisito que la cooperativa y su instituto técnico figuren inscriptos en el registro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Para ser adjudicatarios de un programa habitacional financiado por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, así como para obtener algún préstamo de vivienda de los previstos en esta ley, la cooperativa deberá cumplir con los siguientes extremos:

A) Todos los socios deben cumplir con los topes de ingreso, situación familiar y otros requisitos que determine el organismo financiador o de quien llame a licitación;

B) La propuesta u oferta debe sujetarse estrictamente y en todos los términos a las condiciones del llamado;

C) La propuesta técnico-arquitectónica, el plan de obras y el plan de financiación serán ratificados, además por el instituto de asistencia técnica que se hace corresponsable de la misma.

SECCION III De los usuarios

Artículo 152.- Contrato de uso y goce.-

Cuando se trate de unidades cooperativas de usuarios la cooperativa suscribirá con cada uno de los socios adjudicatarios y con carácter previo a la adjudicación de las respectivas viviendas, un "contrato de uso y goce", que tendrá una duración indefinida mientras las partes cumplan con sus obligaciones.

El "contrato de uso y goce" se otorgará en instrumento privado, con certificación notarial de la firma de los otorgantes y deberá ser inscripto en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas.-

Artículo 153.- Destino.-

Los socios deberán destinar la respectiva vivienda adjudicada para residir con su familia y no podrán arrendarla o cederla -directa o indirectamente- siendo nulo todo arrendamiento o cesión, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.

Si el usuario no destinara la vivienda adjudicada para residencia propia y de sus familiares, será causa bastante para la rescisión del contrato de uso y goce.

Artículo 154.- Derecho de uso.-

El derecho de uso termina:

A) Por el retiro voluntario del socio o sus herederos mediante renuncia.

B) Por expulsión del socio a consecuencia del incumplimiento en el pago de las correspondientes amortizaciones o falta grave a sus obligaciones de socio, no admitiéndose la cesión de derechos sociales a terceros.

C) Por disolución de la sociedad.

En caso de renuncia, anulación o conclusión por otra causa de los derechos de los usuarios, los mismos deberán desocupar la vivienda, dentro de los noventa días de ocurrido el hecho.

La cooperativa dispondrá de un plazo de doce meses, desde la restitución de la vivienda, para hacer efectivo el pago del 50% (cincuenta por ciento) del reintegro a que tuviera derecho. El 50% (cincuenta por ciento) restante, deberá hacerse efectivo en forma posterior a que sea designado el nuevo socio que lo sustituya, pero no más tarde de tres años a partir del vencimiento del plazo anterior.

Artículo 155.- Retiro.-

El retiro voluntario, desde el ingreso a la cooperativa y hasta los diez años de adjudicada la vivienda, deberá solicitarse, ante el Consejo Directivo, con la fundamentación correspondiente.

Si el retiro se considera justificado, el socio tendrá derecho a un reintegro equivalente al valor de tasación de su parte social, menos los adeudos que correspondiera deducir y menos un 10% (diez por ciento) del valor resultante.

Si el retiro no se considera justificado la deducción establecida podrá alcanzar entre el 25% (veinticinco por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) del valor

resultante, según lo establezca la reglamentación, sin perjuicio del descuento de los adeudos del socio.

Los retiros posteriores a los diez años de adjudicación de la vivienda, se regirán por el Estatuto o el Reglamento y los reintegros de las partes sociales a restituir, no serán abatidos en menos de un 10% (diez por ciento) de la parte social.

Cuando ocurriere desinteligencias entre los usuarios y la cooperativa, en cuanto a la naturaleza del retiro o a las sumas que por tal concepto se adeudan, resolverá el diferendo el Juez competente.

Artículo 156.- Partes sociales.-

Las partes sociales se integrarán con los aportes en trabajo (ayuda mutua o autoconstrucción) o el ahorro previo, según la modalidad adoptada, el aporte inicial, aportes extraordinarios y lo abonado por concepto de amortización del préstamo hipotecario. En este caso, las cooperativas podrán decidir, si se capitaliza al socio, sólo lo abonado por concepto de capital o además, lo pagado por concepto de intereses del préstamo obtenido.

Artículo 157.- Exclusión del socio.-

La exclusión del socio, cuando incurra en incumplimiento que constituya falta grave o la incursión en reiteradas faltas medianas, se tramitará de la siguiente forma:

A) Desde el ingreso a la cooperativa y hasta la adjudicación de la vivienda, la aplicación de la exclusión, será resuelta por el Consejo Directivo, mediante información sumaria y oyendo al interesado. La decisión de dicho órgano, será pasible de impugnación mediante los recursos de reconsideración y apelación en subsidio, que se interpondrán conjuntamente, dentro de los diez días hábiles y perentorios de notificada la misma al socio.

El Consejo Directivo dispondrá de un plazo de quince días hábiles para expedirse sobre la reconsideración y si mantuviese la decisión impugnada o no adoptara decisión dentro del término fijado, elevará automáticamente las actuaciones a la Asamblea General, a la que convocará dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del término expresado.

La Asamblea General podrá confirmar la decisión del Consejo Directivo, por mayoría de dos tercios de presentes. En caso contrario se tendrá por confirmada dicha decisión.

Las sanciones se harán efectivas una vez transcurridos los plazos para su impugnación o agotada, en su caso, la sustanciación de los recursos interpuestos.

Los estatutos y los reglamentos preverán los mecanismos de aplicación de las demás sanciones.

B) Luego de adjudicada la vivienda, corresponde la previa tramitación de los procesos jurisdiccionales, según decida el Consejo Directivo, que se enuncian a continuación:

a) El incumplimiento en el pago de aportaciones que corresponden a la amortización de la vivienda, dará lugar al procedimiento de desalojo, según lo dispuesto por las leyes de arrendamientos urbanos, para el arrendatario mal pagador, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente.

Toda vez que el socio afronte dificultades para el pago de la correspondiente cuota de amortización, debido a causas que no le sean imputables, la cooperativa procurará resolver el problema ya sea gestionando el subsidio oficial si correspondiere o mediante un fondo de socorro, destinado a cubrir las momentáneas dificultades financieras de los socios y que podrán constituir las cooperativas de

vivienda. En ambos casos, sólo se atenderá las situaciones en que el amparo hubiese sido solicitado a la cooperativa por el socio, con anterioridad a la acción promovida.

b) El incumplimiento grave de sus obligaciones con la cooperativa, que perjudique a la institución o a los demás socios, podrá determinar que sea solicitada la rescisión del “contrato de uso y goce”, ante Juez competente y por los mismos trámites que para los arrendamientos urbanos.

Mientras dure el juicio, el socio podrá ser suspendido por resolución del Consejo Directivo, apelable a la Asamblea General, en sus derechos como integrante de la cooperativa, salvo aquellos inherentes a su calidad de usuario.

Si no hay lugar a la rescisión, el socio reasumirá plenamente sus derechos.

c) En ambos procesos la remisión se extenderá, en lo relativo a la competencia y al emplazamiento que dispone el inciso final del artículo 20 del Decreto Ley No. 14.219 de 4 de julio de 1974.

Bastará para deducir el accionamiento la decisión del Consejo Directivo.

Amparada la pretensión procesal de la cooperativa, por sentencia ejecutoriada, que equivale a exclusión del cooperativista, se registrará en los libros sociales respectivos y se tendrá por rescindido el contrato, permitiendo la inscripción registral pertinente.

Se podrá abatir de la parte social a reintegrar, al excluido o perdidoso del juicio, un porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre que ello surja de los Estatutos o de Reglamentos aprobados con antelación no menor a un año de la promoción del litigio, si el plazo fuere menor, se aplicará el descuento establecido para renuncia injustificada.

Si se suscitan diferencias en el monto a reintegrar, se determinará el mismo, en la forma establecida en el artículo precedente.

Artículo 158.- Fallecimiento del socio.-

En caso de fallecimiento del socio, los herederos podrán optar por continuar en el uso y goce de la vivienda, en cuyo caso subrogarán al causante en todos sus derechos y obligaciones, debiendo designar a uno de ellos como socio titular o por retirarse de la cooperativa, recibiendo el valor de sus partes sociales.

Cuando los herederos optaren por continuar en el uso de la vivienda, el valor patrimonial de la misma estará exento de todo impuesto nacional.

En caso de disolución de matrimonio, tendrá preferencia para continuar en el uso y goce, aquel cónyuge que conserve la tenencia de los hijos del matrimonio, sin perjuicio de las compensaciones que correspondieren.

Artículo 159.- Aportes.-

Los socios aportarán, mensualmente las cuotas correspondientes a la amortización de la vivienda, cuyo monto se reajustará en Unidades Reajustables y el Estatuto o el Reglamento podrán resolver la consideración de la integración o no, a la parte social de cada socio, de los intereses del préstamo hipotecario, debiéndose, en forma preceptiva capitalizar lo abonado por concepto de amortización, destinado a pago de capital.

Los socios aportarán igualmente, en forma mensual, una suma adicional, destinada a cubrir los gastos de administración, de mantenimiento y demás servicios que suministre la cooperativa a los usuarios. Esta suma adicional no integra la cuota social y en consecuencia, no es reintegrable. El atraso reiterado en el pago de esta

suma adicional, será considerado causal suficiente para la exclusión del socio o la promoción de juicio de rescisión del contrato, según corresponda.

Artículo 160.- Obligaciones de la Cooperativa.-

La cooperativa pondrá a los socios en posesión material de sus respectivas unidades de vivienda adjudicadas, los mantendrá en el ejercicio de sus derechos, los defenderá en las posibles perturbaciones de los terceros y pagará los préstamos, intereses, contribuciones, reparaciones y demás obligaciones y servicios comunes, de acuerdo a lo previsto en la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 161.- Reparaciones y Exoneración.-

Serán de cargo de la cooperativa todas aquellas reparaciones que derivan del uso normal de la vivienda y no se producen por culpa del usuario, en los cinco primeros años luego de la adjudicación y posteriormente, si tuviese los fondos creados a tal efecto, por sus órganos sociales.

Las viviendas de interés social que, según el régimen de la Ley No. 13.728, de 17 de diciembre de 1968, se otorguen en uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o locales, no pagarán impuesto alguno que grave la propiedad del inmueble.

Artículo 162.- Normas supletorias.-

Para regular las relaciones entre la cooperativa y los usuarios se aplicarán en todo lo que no se oponga a la presente ley, las disposiciones del Código Civil relativas al arrendamiento.

Sección IV De los Propietarios

Artículo 163.- Retención de la propiedad.-

En las unidades cooperativas de propietarios, la cooperativa podrá retener la propiedad de las viviendas mientras dure la amortización de los créditos si así lo establecen los estatutos. En ese caso, los futuros propietarios regularán sus relaciones con la cooperativa por las normas establecidas en este capítulo en lo que les fuere aplicable, pero sin los beneficios que otorga el art. 158 inciso 2o.

Las cooperativas de propietarios, efectuarán la novación del crédito hipotecario, en forma simultánea de todas las viviendas, previa Asamblea con mayoría calificada o dos tercios de los socios y hasta ese momento se regirán, igualmente que en el inciso anterior, por las disposiciones que regulan a las cooperativas de usuarios.

A partir del momento en que se efectúe la novación del préstamo hipotecario, los socios, podrán o no continuar integrando la cooperativa, según lo establezcan sus estatutos, pero serán deudores directos por los créditos hipotecarios que se les hubieren otorgado.

Artículo 164.- Indisponibilidad.-

Los propietarios deberán destinar la vivienda para residencia propia y de su familia y no podrán arrendarla o enajenarla sin causa justificada y luego de obtenida la autorización del organismo financiador. Las operaciones realizadas en

contravención de esta disposición serán nulas y pasibles de las multas previstas en el artículo 46 de la ley 13.728.

SECCION V

De las Cooperativas Matrices de Vivienda

Artículo 165.- Definición.-

Son Cooperativas Matrices de Vivienda aquellas que reciben en forma abierta la inscripción de socios mediante un compromiso de aportes sistemáticos de ahorro y con la finalidad de asistirlos en la organización de Unidades Cooperativas de Vivienda, en la decisión y realización de sus programas de obtención de créditos, adquisición de terrenos, proyectos, construcción y adjudicación de viviendas y ejercer las funciones que en ellas deleguen a esos fines, las Unidades Cooperativas filiales.

Artículo 166.- Ámbito.-

Las Cooperativas Matrices de Vivienda actuarán limitadas a un gremio o a un ámbito territorial determinado y se denominarán, respectivamente, gremiales locales. La reglamentación determinará las condiciones que deberán reunir los grupos gremiales o locales para ser considerados tales a los efectos de esta ley.

Artículo 167.- Socios sin vivienda.-

Las Cooperativas Matrices de Vivienda no podrán superar el número de mil socios sin vivienda adjudicada, salvo que la Dirección Nacional de Vivienda lo autorice en consideración al interés general y siempre que se encuentren garantizados los derechos de los socios.

Artículo 168.- Criterios.-

La reglamentación fijará los criterios generales que regularán el derecho de los socios a recibir viviendas. Estos criterios deberán tener en cuenta por lo menos, la antigüedad del socio, su cumplimiento de las obligaciones de tal, sus cargas familiares y su situación habitacional.

Artículo 169.- Unidades Cooperativas.-

Por cada inmueble o conjunto habitacional cuya construcción decida, la Cooperativa Matriz deberá organizar con los destinatarios de las viviendas una Unidad Cooperativa.

Estas Unidades Cooperativas permanecerán ligadas a la Cooperativa Matriz en calidad de filiales por lo menos hasta que hayan adjudicado definitivamente las viviendas y cancelado sus deudas con la misma.

Entre tanto la Cooperativa Matriz estará obligada a prestarles asistencia técnica y financiera y tendrá sobre ellas el contralor que la reglamentación establezca.

Artículo 170.- Proyecto urbanístico y edilicio.-

Las Cooperativas Matrices en caso de promover grandes conjuntos habitacionales, deberán establecer un proyecto urbanístico y edilicio de conjunto. Los lineamientos generales de estos proyectos deberán ser respetados por las unidades cooperativas filiales.

Artículo 171.- Licitaciones.-

Las cooperativas matrices de vivienda podrán participar en licitaciones y llamados de presentación de propuestas que realice el sistema público en representación de su unidades cooperativas, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas por el artículo 148 de esta ley.

Artículo 172.- Elecciones.-

En la elección de autoridades participarán solamente los socios que aún no tengan vivienda adjudicada, pero podrán ser electos para los cargos directivos todos los socios que permanezcan vinculados a la cooperativa, directamente o a través de las unidades cooperativas filiales.

**SECCION VI
De los Institutos de Asistencia Técnica**

Artículo 173.- Definición.-

Son Institutos de Asistencia Técnica aquellos destinados a proporcionar al costo servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro, pudiendo incluir también los servicios técnicos de proyecto y dirección de obras.

Artículo 174.- Personería y Forma.-

Estos institutos deberán obtener la personería jurídica y constituirse bajo una modalidad societaria, cooperativa o asociativa.

Artículo 175.- Estatutos.-

Los estatutos de estos Institutos establecerán necesariamente:

- A) Denominación y domicilio.
- B) Servicios que presta a las cooperativas.
- C) Organización interna.

Artículo 176.- Costos máximos.-

La reglamentación determinará los costos máximos de los servicios que proporcionan los Institutos de Asistencia Técnica, no pudiendo sobrepasar en ninguno caso el 7 % (siete por ciento) del valor total de las obras en caso de proporcionarse la totalidad de los servicios indicados en el artículo 170 de la presente ley.

Artículo 177.- Excedentes.-

Los Institutos de Asistencia Técnica no podrán distribuir excedentes si los obtuvieran, debiendo emplearlos exclusivamente en la realización de su objeto social.

Todas las retribuciones que paguen estarán sujetas a la reglamentación y control de la Dirección Nacional de Vivienda.

Artículo 178.- Sanciones.-

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá disponer la suspensión o retiro de la personería jurídica a los Institutos de Asistencia Técnica, en atención a la configuración de las siguientes causales y según la

gravedad de las infracciones que constate, y sin perjuicio de las sanciones que en función a lo expuesto corresponda aplicar:

A) por exceder los topes fijados legalmente en la percepción de las retribuciones por sus servicios;

B) por la insolvencia técnica determinada por técnicos de dicho Ministerio;

C) por realizar o respaldar actividades contrarias a la finalidad cooperativa, o actuar en cualquier forma al servicio de terceros en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas;

D) por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Reglamentación a los servicios que obligatoriamente deben prestar a las Cooperativas que contraten sus servicios;

E) por no presentar en los plazos estipulados la documentación que le sea requerida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que esté referido a la competencia legal del mismo y en función de la reglamentación vigente, o por no llevar la misma en la forma en que legal o contablemente corresponda.

Cuando se configure alguna infracción, el Ministerio indicado tendrá las más amplias facultades de investigación, pudiendo disponer la suspensión de la personería jurídica por un plazo que no excederá de un año y en función de la gravedad constatada, podrá disponer el retiro de la personería jurídica sin perjuicio de la aplicación de las multas que en función de dichos hechos resulten aplicables.

Las multas no serán inferiores a 10 UR (diez Unidades Reajustables) ni mayores de 1000 UR (mil Unidades Reajustables), a cuyos efectos la reglamentación establecerá la forma en que las mismas se graduarán.

Los técnicos que integren un Instituto que sea objeto de sanción, en tanto la misma se encuentre vigente, no podrán intervenir o participar en cualquier otro Instituto de similar naturaleza mientras la multa aplicada no hubiere sido cancelada y el plazo de la sanción vencido. La reiteración de una circunstancia de esta naturaleza determinará la imposibilidad de integrar otro Instituto por el plazo de cinco años.

Serán solidariamente responsables del pago de la multa aplicada a los Institutos de Asistencia Técnica sancionado todos los integrantes del mismo.

Los Institutos de Asistencia Técnica deberán presentar conjuntamente con toda la documentación la lista de los integrantes responsables del mismo.

CAPITULO VI COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Artículo 179.Objeto Sin perjuicio del concepto de cooperativa establecido en el artículo 4° del Título I, Parte General, Capítulo I, Disposiciones Generales, serán consideradas cooperativas de Ahorro y Crédito, aquéllas que cumpliendo con los principios cooperativos establecidos en el artículo 7 del mismo Título y Capítulo, tengan por objeto promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros servicios financieros.

Artículo 180. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán ser de intermediación financiera o de capitalización. Son de Intermediación Financiera las Decreto-ley que pueden realizar todas las operaciones bancarias y están sometidas en lo pertinente al contralor del Banco Central del Uruguay y de los demás organismos de Contralor previstos en la presente Ley.

Son de Capitalización aquéllas cuyo objeto principal es operar con los aportes sistemáticos de capital de sus asociados, no pudiendo tener operativa bancaria, por lo que no estarán sometidas al contralor del Banco Central del Uruguay.

Artículo 181. Participaciones Subordinadas y Acciones con Interés Las cooperativas de ahorro y crédito si ello está previsto en su estatuto, podrán emitir participaciones subordinadas y acciones con interés de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 de la parte general, para lo que deberán obtener la autorización previa del órgano estatal legalmente previsto. Las acciones emitidas formarán parte de su patrimonio esencial y contable.

Las acciones con interés a que refiere el inciso anterior serán nominativas, no originarán a sus tenedores derechos sociales (voz y voto en asambleas generales, derecho a elegir y ser elegido como dirigente), no podrán emitirse por un importe mayor al 50% (cincuenta por ciento) del capital social resultante al cierre del ejercicio anterior al de la emisión y podrán ser rescatadas en cualquier momento por la cooperativa emisora. La Asamblea General determinará las condiciones de cada emisión, el plazo de suscripción y el tipo de interés de las acciones correspondientes a la misma. Las acciones deberán contener:

La expresión "acción con interés"

Denominación y domicilio de la cooperativa y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Capital social.

Valor nominal de la acción

Fecha de creación.

El nombre del tenedor de la acción

El lugar y fecha de pago de los intereses, si no fuera el mismo que el domicilio

El monto y la moneda de cada acción

El interés y la forma de reajuste o actualización del capital, si correspondiere

Artículo 182. Las CAYC deberán cumplir los siguiente requisitos:

- a) Estar constituidas inicialmente por un número de personas no inferior a cincuenta y cuenten con más de doscientos socios activos al vencimiento de dos años contados desde la fecha de su fundación, entendiéndose por socio activo al que esté al día con sus obligaciones económicas y con las partes sociales integradas que fije la Asamblea General. Las cooperativas actualmente existentes que no alcancen esos mínimos, dispondrán del plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley para el logro de los mismos.
- b) En las cooperativas de capitalización, ningún socio a título individual o conjuntamente con su grupo económico o familiar, podrá ser titular de más de un 10% de las partes sociales de la cooperativa. En el caso de socios que revistan la calidad de cooperativa o persona jurídica sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo de un 15%.
- c) Los pasivos financieros de las cooperativas de capitalización estén contraídos con empresas o instituciones de crédito supervisadas por el Banco Central del Uruguay o, con organismos internacionales de reconocida solvencia técnica o

entidades nacionales o extranjeras pertenecientes al movimiento cooperativo, bancos estatales o instituciones sin fines de lucro.

- d) El monto de los créditos que se otorguen a cada socio individualmente o a su grupo económico o familiar en su conjunto no exceda:

En el caso de las cooperativas de capitalización, el equivalente al 10% del patrimonio de la entidad.

En el caso de socio que revista la calidad de cooperativa o persona jurídica sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15%.

En el caso de las cooperativas de intermediación financiera, según lo que establezcan las normas del Banco Central del Uruguay.

- e) Los excedentes se distribuirán de la siguiente manera:

Un mínimo del 5% para un Fondo destinado al cumplimiento del Principio Cooperativo de Educación. Capacitación e Información.

Un mínimo del 30% para la constitución de un Fondo de Reserva.

El remanente, según lo resuelva la Asamblea General, se destinará a uno o varios de los siguientes fines:

- i. ✘ Interés que podrá ser capitalizable a las Partes Sociales integradas al cierre del Ejercicio.
- ii. ✘ Interés a otros instrumentos de capitalización que hubiera emitido la cooperativa en cuya emisión se previera que los mismos se pagarán contra excedentes.
- iii. Distribución entre los socios que hubieran tomado créditos o utilizado otros servicios de la Cooperativa en proporción a los intereses pagados en el año, que podrán capitalizarse.
- iv. ✘ A otros fines sociales o constitución de Fondos Especiales con finalidades específicas.

Celebren regularmente sus Asambleas Generales Ordinarias anuales, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia de un número de socios no inferior al 10% de los socios activos, según se definen en el literal a) de este artículo en primera convocatoria y el 5% de los mismos o 30 socios activos (el menor de ambos) en segunda convocatoria, controladas por los organismos de contralor previstos en la presente ley. En caso de tratarse de Asambleas de Delegados, si el Estatuto la prevé, las mismas deberán constituirse con no menos de 50 delegados y su quórum mínimo será del 50%.

Artículo 183. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4, o que se constate la violación de los principios cooperativos establecidos en el artículo 7° del Título I Parte General, Capítulo I: "Disposiciones Generales"; o previsto en esta ley, sin perjuicio de los demás poderes de contralor que le están atribuidos legalmente informarán a sus efectos a la Dirección General Impositiva e intimará judicialmente a la cooperativa incumplidora al cese inmediato de la percepción de las sumas retenidas según lo dispuesto en el artículo de las disposiciones generales, siguiéndose en lo pertinente el procedimiento del juicio extraordinario.

Artículo 184. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de capitalización deberán presentar sus estados contables ante el Órgano de Contralor previsto en esta Ley, para su correspondiente visación, en las condiciones que el referido Órgano establezca.

Artículo 185. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de intermediación financiera presentarán sus estados contables del ejercicio ante el Banco Central del Uruguay y

entregarán copias de los mismos, con constancia de lo anterior al Órgano de Contralor, establecido en esta Ley.

Artículo 186. Prohibición.- La prohibición establecida en el literal c) del artículo 18 del Decreto Ley N° 15.322, no se aplicará a los socios de cooperativas de ahorro y crédito de intermediación financiera que integren cargos de dirección, fiscalización o asesoramiento en las mismas.

Artículo 187.- Servicios de Protección.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán establecer servicios de protección de sus ahorros y créditos para el caso de fallecimiento o incapacidad del socio.

CAPITULO VII COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Artículo 188.- Objeto.-

Las cooperativas de profesionales de la salud son las que tienen por objeto proporcionar asistencia médica a sus afiliados y socios, y en las que el capital social es aportado por los profesionales que trabajan en ellas.

Se regirán por esta ley, por lo dispuesto en el Decreto – Ley 15.181 de 18 de agosto de 1981 y en general por la legislación sanitaria y de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

CAPITULO VIII COOPERATIVAS DE SEGUROS

Artículo 189.- Objeto.-

Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto la actividad aseguradora en cualquiera de sus ramas.

Se regirán por lo dispuesto en esta ley y por la legislación de seguros en lo pertinente.

CAPITULO IX COOPERATIVAS DE GARANTIA RECIPROCA

Artículo 190.- Objeto.-

Son cooperativas de garantía recíproca las que tienen por objeto la prestación de servicios de garantía o aval o fianza para respaldar operaciones de sus miembros, pudiendo brindar también servicios de asesoramiento.

También podrán operar con no socios con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO X COOPERATIVAS SOCIALES

Artículo 191.- Objeto.-

Son cooperativas sociales sean de trabajadores, consumidores, o trabajadores y consumidores a la vez, las que tienen por objeto el perseguir el interés general de la

comunidad mediante la promoción y la plena integración social o laboral de personas y grupos a través de:

- a) La prestación de servicios sociales relacionados con la educación, asistencia, trabajo, sanidad, cultura y recreación, dirigidas a la protección de la infancia, la adolescencia y la juventud, a los adultos mayores, las personas con minusvalía y otros grupos desfavorecidos.
- b) El desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, dirigidas a la inserción laboral de los jóvenes y mujeres, minorías étnicas, ex-reclusos, alcohólicos, toxicómanos y personas marginadas que sufran cualquier clase de exclusión social.
- c) La satisfacción de necesidades sociales no atendidas o atendidas insuficientemente por el mercado.

Las cooperativas sociales podrán adoptar la forma de cooperativas de trabajo asociado para organizar, canalizar y promover el trabajo de los socios; y la de cooperativas de consumo, para proveerles de bienes y servicios de consumo general o específicos.

Artículo 192.- Requisitos.-

Para ser calificada una cooperativa social deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que se produzcan excedentes, los mismos se dedicarán a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.
- b) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes de los gastos que puedan generárseles por el cumplimiento de sus funciones.
- c) Las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias como voluntarias, no podrán devengar un interés superior a la tasa equivalente a la variación anual del Índice de Precios al Consumo más cinco puntos. Si se previere la actualización del valor de las mismas por cualquier índice objetivo, el interés no será superior al 5% anual.
- d) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar el ciento cincuenta por ciento de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable que guarde mayor analogía o, en defecto del mismo, determine el Consejo Superior del Cooperativismo.

El incumplimiento de cualesquiera de los anteriores requisitos determinará la pérdida de la calificación de cooperativa social.

Artículo 193.- Socios.-

Si el objeto de una cooperativa es la plena inserción de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, puede estar integrada, conjunta o indistintamente, por estas personas si son legalmente capaces, por sus representantes legales y el personal de atención.

Las entidades y organismos públicos podrán participar en calidad de socios de estas cooperativas en la forma que estatutariamente se establezca.

Artículo 194.- Fomento.-

Se declara de interés general el fomento de las cooperativas de integración social. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional o municipal. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Facultase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de aportación, como único aporte a Seguridad Social, a las cooperativas sociales cuyo volumen de actividad se encuadre en las condiciones que al respecto fije la reglamentación.

El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación tendiente a su promoción, que podrá incluir subsidios, facilidades para el acceso a programas de obras públicas, y disposiciones especiales que faciliten la contratación de obras, bienes y servicios de dichas cooperativas por los organismos públicos.

CAPITULO XI

COOPERATIVAS DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE PROFESIONALES

Artículo 195.- Definición.-

Las cooperativas de servicios empresariales o de servicios profesionales son las que asocian a personas físicas o jurídicas que son titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o artistas que ejercen su actividad por cuenta propia. Las cooperativas de servicios tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la ejecución de operaciones destinadas a la mejora económica y técnica de las actividades profesionales o de las explotaciones de los socios.

Artículo 196.- Actividades.-

Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas de servicios pueden llevar a cabo las siguientes actividades:

- a) Adquirir, elaborar, producir, fabricar, reparar y mantener los instrumentos, la maquinaria, las instalaciones, el material, los productos y los elementos necesarios o convenientes para la cooperativa y para la actividad profesional o las explotaciones de los socios.
- b) Llevar a cabo la gestión de industrias auxiliares o complementarias de las de los socios y ejecutar operaciones preliminares o realizar transformaciones que favorezcan la actividad profesional o las explotaciones de los socios.
- c) Transportar, distribuir y comercializar los servicios y los productos procedentes de la cooperativa y de la actividad profesional o las explotaciones de los socios.
- d) Cualquier otra actividad que sea necesaria o conveniente o que facilite la mejora económica, técnica, laboral o ambiental de la actividad profesional o las explotaciones de los socios.

TITULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS

Artículo 197.- Sección Registro Nacional de Cooperativas.-

Créase dentro del Registro de Personas Jurídicas, creado por el artículo 294 de la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001, la Sección Registro Nacional de Cooperativas que tendrá los cometidos y funciones que le asigna la presente ley.

En la Sección Registro Nacional de Cooperativas se inscribirán los siguientes actos y contratos:

- 1) el acta de constitución y el estatuto de las cooperativas;
- 2) los contratos de uso y goce previstos por el artículo 152 de la presente ley;
- 3) todos los actos que alteren o modifiquen las inscripciones efectuadas.

Los documentos que se presenten a inscribir deberán acompañarse de un formulario con información actualizada de las mismas, cuya forma y contenido reglamentará el Consejo Superior del Cooperativismo, el que oportunamente será remitido a éste por el Registro Nacional de Cooperativas. La cooperativa inscribiente justificará estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Consejo Superior del Cooperativismo, exhibiendo la documentación probatoria que determine la reglamentación.

Artículo 198.- Control de Asambleas y Elecciones.-

Las disposiciones referidas al control de las asambleas y elecciones regirán sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 12.179 de 29 de julio de 1954 y su decreto reglamentario.

Artículo 199.- Vigencia de las Normas de Retenciones

Mantienen plena vigencia todas las normas legales que consagran y regulan a favor de las cooperativas, la facultad de utilizar el procedimiento de las retenciones de los haberes y pasividades de sus socios, para el cobro de las partes sociales, cuotas de ahorro o amortización de créditos, cuotas de admisión, sostenimiento y solidaridad o cualquier otro concepto establecido en dichas normas, ya sea en empresas u organismos privados o públicos.-

Artículo 200.- Régimen Tributario.-

Las cooperativas mantendrán todas las exoneraciones tributarias actualmente vigentes para el régimen cooperativo.

Se extiende el régimen de exoneraciones tributarias de las actuales cooperativas de consumo, a todas las cooperativas de consumidores y de consumidores y trabajadores a la vez, excepto aquellas clases o tipos de cooperativas en las que se haya previsto algo diferente en su respectivo capítulo particular del Título II (De las cooperativas en particular) de la presente ley o ya se encuentre previsto en la legislación vigente, en cuyo caso se aplicará lo allí dispuesto.-

En cualquier caso, para mantener o quedar incluidas en el régimen tributario referido en los incisos anteriores, las cooperativas deberán funcionar de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.-

Artículo 201.- Transformación de Federaciones

Las entidades de segundo o tercer grado existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, representativas de un sector de las cooperativas o

de la totalidad de ellas, que no posean la forma jurídica de cooperativa, tendrán la facultad de transformarse en cooperativa de segundo o ulterior grado según corresponda.

Artículo 202.- Enseñanza del cooperativismo.-

Los Órganos Competentes de la Educación, en coordinación con el Consejo Superior del Cooperativismo, deberán elaborar los programas curriculares de los niveles primario, secundario y terciario, que incorporen progresivamente la enseñanza y la práctica del cooperativismo, así como la formación de los docentes respectivos.

Artículo 203.- Sociedades de Fomento Rural y Comisión Nacional de Fomento Rural

Las Sociedades de Fomento Rural y la Comisión Nacional de Fomento Rural en tanto entidades cooperativas se regirán por sus leyes especiales sin perjuicio de la aplicación de esta ley en lo no previsto por ellas y en cuanto sea compatible.

Artículo 204.- Funcionamiento del Consejo Superior del Cooperativismo

Mientras no se asignen los recursos materiales y humanos al Consejo Superior del Cooperativismo, las funciones referidas en los artículos 86 numeral 7 y 180 de la presente ley serán realizadas por la Auditoría Interna de la Nación, en coordinación técnica con dicho Consejo y con las atribuciones referidas en el artículo 89.-

Artículo 205.- Adaptación de las cooperativas a las previsiones de la Ley.-

Las cooperativas, constituidas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, dispondrán de un plazo de dos años a partir de dicha fecha para adaptar sus estatutos a lo establecido en esta ley.

La reforma del estatuto deberá adoptarse en Asamblea General Extraordinaria, siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes.

Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia de la presente ley no se inscribirá en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas documento alguno de cooperativas sometidas a esta ley hasta tanto no se haya inscrito la adaptación de sus estatutos sociales; y serán pasibles de las sanciones previstas en la presente ley.

Artículo 206.- Adaptación de las cooperativas de ahorro y crédito.-

Las disposiciones del Capítulo VI del Título II referido a las cooperativas de ahorro y crédito, en lo pertinente, serán aplicables de pleno derecho a las cooperativas de ahorro y crédito constituidas o en trámite de constitución a la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 207.- Derogaciones.-

Deróganse las siguientes leyes y decretos-leyes: 10.761 de 15 de agosto de 1946; 12.771 del 6 de setiembre de 1960 en lo relativo a las cooperativas; 13.481 del 23 de junio de 1966 sin perjuicio de mantenerse vigentes los beneficios acordados por el artículo 1º de la ley 14.019 de 10 de setiembre de 1971; artículos 130 a 176 de la ley 13.728 de 17 de diciembre de 1968; inciso tercero del artículo 2 de la ley

13.988 de 19 de julio de 1971 en la redacción dada por el artículo 1º de la ley 14.919 de 15 de agosto de 1979; 14.827 de 20 de setiembre de 1978; 15.645 de 17 de octubre de 1984; artículo 515 de la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989; 16.156 de 29 de octubre de 1990; artículo 506 de la ley 16.320 de 1º de noviembre de 1992; artículos 190 a 192 de la ley 16.736 de 2 de febrero de 1996; artículo 47 de la ley 17.292 de 25 de enero de 2001; artículos 407, 633 y 634 de la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001; y todas las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a la presente ley.